

LAS PROVINCIAS ANTE LA CORTE



BIBLIOTECA CORTE :	
Nº. DE	3736
UBICACION	F 102
FICHA MATERIA	

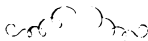
PROVINCIAS ANTE LA CONSTITUCIÓN



ESTUDIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

POR

MARCELINO UGARTE



BUENOS AIRES

Imp. «Buenos Aires», Calle de Moreno, frente a la casa de Villanueva

1866.





Bajo el título «Justicia Nacional», el Dr. Irigoyen ha publicado, no ha mucho, un estudio, que tiene por objeto sostener la jurisdiccion que la Suprema Corte se atribuye, para juzgar á las Provincias en demandas interpuestas por simples particulares.

La reputacion, bien merecida, que el Dr. Irigoyen ha sabido adquirir como hombre de inteligencia, la seria meditacion con que está ese estudio elaborado, y la verdad de convicciones que refleja, lo hacen muy digno de que se fije la atencion en él.

Escritos que tales condiciones tienen, son muy capaces de ejercer influjo en la opinion, y pueden contribuir á que se acredite eficazmente lo que, con una fuerza de conviccion igual á la que el Dr. Irigoyen manifiesta, me atrevo á sostener que es un error.

He sido el primero en defender, como Abogado de la Provincia de Entre-Rios, la doctrina contraria á la que el Dr. Irigoyen patrocina; y esa opinion, emitida con reflexion y entero convencimiento, me autoriza para aceptar la discusion, sin que parezca que procedo por jactancia, al oponer mi razonamiento y mi palabra. al razonamiento firme y á la palabra ejercitada del cólega y amigo, que tan distinguida posicion ocupa en nuestro foro.

Una razon de órden general, por otra parte, y estraña, al primer golpe de vista, á la cuestion, pero que tiene con ella, sin embargo, íntima relacion, obra con fuerza en mi para inducirme á no dejar sin respuesta, la defensa que con habilidad se ha hecho, de una doctrina esencialmente opuesta á la indole de las instituciones federales, y contraria, por tanto, al sistema de la Constitucion Argentina.



Bajo el imperio de una Constitucion federativa — fenómeno singular! se viene desenvolviendo una tendencia unitaria, contra la cual tenemos el deber de defendernos, los que creemos que el sistema de esa Constitucion es la forma mas perfecta de gobierno que conoce hasta hoy la humanidad, y la forma, además, que la voluntad de los Pueblos, los hechos producidos, y las condiciones actuales de la Sociedad Argentina hacen inevitable.

Aunque deba alejarme del objeto que principalmente tengo en vista, juzgo que es necesario comprobar con los hechos la tendencia que señalo, y demostrar sumariamente sus inconvenientes y peligros.

Esa digresion, si bien puede ser larga con relacion á la materia de este escrito, no será sin interés para los que observan con ansiosa expectativa, la aplicacion que se está haciendo, por primera vez con esperanza de un éxito favorable, del gobierno constitucional en nuestro país.

II

La primera manifestacion de la tendencia unitaria fué el proyecto, tan calorosamente sostenido, de federalizar la Provincia entera de Buenos Aires.

¿Necesito demostrar el carácter esencialmente unitario, que revestia ese proyecto?

No tendré mas trabajo que el de tomar, en el diario de sesiones, las palabras de los que lo sostuvieron y de los que lo impugnaron, empezando por las del eminente Senador que abrió aquel solemne debate en el Senado.

El Dr. D. Valentin Alsina, despues de manifestar la necesidad de que las leyes orgánicas y las leyes generales se ajustasen al tipo fundamental de la Constitucion, que habia consagrado el sistema federal, decia que la capitalizacion de Buenos Aires con todo su territorio, « sería un disimulado falseamiento, ó mas bien, una



« solemne abjuracion de los principios de equilibrio y
« de igualdad relativa, que hacen la esencia del régimen
« federativo » (1).

« Si todo el poder de esta Provincia, decia el Dr. Ver-
« lez Sarsfield en seguida, se traspasa al poder Nacional.
« está acabado el poder de los Estados particulares, y
« todos los dias podria desconocerlo el Gobierno Nacio-
« nal, sin cuidado alguno. Nos llamariamos Estados fe-
« derados, y las Provincias no serían sino meras depen-
« dencias del poder Nacional, cuando por la Constitucion
« de la Republica, deben tener una soberanía esclusiva
« en sus territorios » (2), y negaba la constitucionalidad
del proyecto, aunque consintiera en él la Provincia que
se queria federalizar, « porque ella no podia despeda-
« zar la Constitucion federal, haciendo que la mitad de
« la Nacion estuviese gobernada por un gobierno unita-
« rio, y la otra mitad por un gobierno federal » (3).

El Dr. Rawson sostenia, con el vigor de argumenta-
cion y de lenguaje que es habitual en él, que « una vez
« que el hecho se hubiera producido en Buenos Aires.
« tendríamos la chocante contradiccion de una Nacion
« constituida bajo el régimen federal y gobernada con
« el régimen unitario » (4).

En el mismo sentido que los oradores del Senado.
se pronunciaron los oradores de la Cámara, entre
los que hubo alguno que, declarándose francamente
« partidario del sistema unitario », dijo que aceptaba el
« proyecto de federalizacion provisoria de la Provincia
« de Buenos Aires, como el único medio que haria me-
« nos dificil que el Congreso venidero sancionase la fe-
« deralizacion permanente, que para él seria el primer
« paso en la via de la reforma constitucional » (5).

(1) Sesión del 19 de Junio de 1862.

(2) Sesión del 23 de Junio de 1862.

(3) Sesión cit.

(4) Sesión del 1.º de Julio de 1862.

(5) Sesión del 11 de Agosto de 1862.



III

La segunda manifestacion de la tendencia unitaria, fue la doctrina sostenida por el Sr. Ministro del Interior, negando á los Gobiernos de Provincia la facultad de declarar el estado de sitio, *en ningun caso y por ninguna consideracion* (1), doctrina que, desarmándolos en presencia de la sedicion ó la invasion, prepara el camino á otra doctrina, espuesta tambien por el Sr. Ministro, que puede mirarse como la tercera manifestacion de la misma tendencia.

Aunque reconoce que « un Gobierno de Provincia « depuesto, ó amenazado de serlo, tiene el derecho de « prescindir del apoyo del Gobierno Nacional, » ha sostenido, sin embargo, que « hay una gran conveniencia « en que los Gobiernos de Provincia depositen la principal confianza para su estabilidad en el Gobierno de « la Nacion, á quien la Constitucion ha encargado de garantizarlos contra los embates de la sedicion, poniendo « en sus manos los medios de realizarlo y dándole el tesoro y la direccion de la fuerza pública » . . . y que « si el gobierno federal está obligado á ocurrir en defensa de una Provincia, cuando fuera solicitado por la « requisicion de sus autoridades constituidas, *hay tambien una obligacion moral correlativa de parte de estas, de requerir esa defensa en sus conflictos; por- que, no siéndoles permitido por la Constitucion armar ejércitos, aun para la defensa del orden interior, sin comunicarlo inmediatamente á las autoridades de la Nacion, so pena de dar una apariencia anárquica y aun sediciosa á sus actos tienen el deber constitucional de poner inmediatamente en conocimiento de las autoridades nacionales, los actos de guerra que se vieren*

1) Circular de 13 de Mayo de 1863 y Nota al Gobernador de San Juan, de 31 de Julio.



« forzados á ejercer por el mantenimiento del órden en
« su territorio, á fin de que *la aprobacion de esas me-*
« *did*as aumente y vigorice su autoridad local, y dando-
« les mayor eficacia, concorra indirectamente á los fi-
« nes para los cuales hayan sido empleados » (1).

Convertido en *obligacion moral* lo que, segun la Constitucion, es un derecho para los Gobiernos de Provincia—privados estos de las facultades anexas al estado de sitio, que no debe declararse, es cierto, sino « *como una rara escepcion,* » segun decia el señor Ministro en su circular citada, pero que son, en muchos casos, necesarias para restablecer el órden conmovido, y aun para precaver mayores males que pueden sobrevenir por falta de vigor oportuno en el Poder—impuesta la intervencion nacional, en los casos de perturbacion interior, á las Provincias, aunque no la crean sus Gobiernos necesaria; pues á eso tiende *la obligacion moral* que se supone en ellos, y la necesidad de obtener *la aprobacion* de los actos de guerra que se vieren forzados á ejercer para el mantenimiento del órden en su territorio—esos Gobiernos quedan moral y materialmente colocados bajo la estricta dependencia del Poder federal.

Impotentes para defenderse, si el peligro llega, sin derecho para vencer en la defensa, aunque pudieran, necesitan, para vivir seguros, la buena voluntad de los que ejercen el Poder en la Nacion; y como estos son hombres, con sus debilidades y pasiones, los Gobiernos de Provincia necesitan acariciar la mano poderosa que los pueda salvar en el conflicto. Y esa doctrina acaba por ser forzosamente “una jurisprudencia unitaria, “ aplicada á una Constitucion federal,” como dijo el Señor Sarmiento, Gobernador de San Juan (2).

(1) Sesion del 23 de Junio de 1861, en el Senado.

(2) Nota al señor Ministro del Interior, de 26 de Junio de 1863.



IV

La jurisdiccion que se atribuye á la Corte, y que no hago mas que indicar aquí, porque de ella he de tratar estensamente en adelante, es otra manifestacion del espiritu unitario.

Ese caso de jurisdiccion no es, en efecto, sino un caso de intervencion que tendria el Poder Nacional, representado por la Suprema Corte de Justicia, en asuntos de la administracion interna provincial, y toda intervencion del Poder Nacional, que no sea para sostener ó restablecer las autoridades provinciales, segun el artículo 6.º de la Constitucion, es decir, que no sea para hacer efectiva la garantia de que habla el artículo 3.º, es una intervencion depresiva de la autonomia provincial, centralizadora, absorbente, unitaria, que tiende á colocar el poder reservado en las Provincias, bajo la tuicion ó bajo la correccion del Poder federativo.

V

La reforma constitucional, que tiene por objeto dar al Congreso, la facultad de establecer derechos de exportacion, es otra manifestacion de la tendencia unitaria.

El resultado final de esa reforma, que el señor Ministro del Interior pedia para ejecutar las grandes obras de la paz, y el señor Ministro de Relaciones Exteriores para atender á las grandes necesidades de la guerra (1)—el resultado final de esa reforma es inhabilitar á las Provincias, para obtener la independencian de sus recursos y de sus gastos, sin la que no puede ser efectiva la in-

(1) Sesion del 23 de Mayo de 1866, en la Cámara de Diputados.



dependencia del poder que les ha sido reservado para los objetos de su administracion y de su progreso interno.

Los hechos económicos son los que menos puede el legislador subordinar á reglas arbitrarias; y los hechos económicos fijan un límite de que no puede pasarse. á la masa de contribucion que ha de pagar un pueblo.

Si el Poder Nacional se estiende hasta ese límite en la contribucion que impone y que recauda para objetos generales —ó quedan las Provincias en imposibilidad absoluta de imponer y recaudar contribucion por su parte, respetando el límite de los hechos económicos—ó tienen que exederlo, violentando la ley que está en la naturaleza de las cosas, impidiendo la nueva creacion de capital, y destruyendo el capital que está ya creado.

La perturbacion, que seria consecuencia inmediata del segundo caso, no tardaria en demostrar con la fuerza á que ningun razonamiento puede aspirar jamás, que no es posible violar impunemente reglas superiores á la voluntad y al poder de los hombres.

De manera que el primer caso es el único que puede mirarse como hecho permanente, como resultado final de la reforma—la imposibilidad absoluta para las Provincias, de imponer y recaudar contribucion por su parte, en cantidad suficiente para cubrir sus gastos, y la consiguiente imposibilidad de hacer efectiva la independencia de su poder particular.

La absorcion de la renta hecha por el Poder Nacional, es la absorcion del poder todo. ¿Qué es lo que sin renta puede hacerse? ¿Qué administracion se puede sostener? ¿Qué impulso se puede dar al progreso?

Absorvida la renta por el Poder Nacional, toda iniciativa, toda accion queda refundida en él, y los Poderes provinciales reducidos á meras intendencias del Poder central, destinados á hacer lo que el Poder central quiera consentirles que hagan, porque él tiene el arbitrio de estender ó restringir la iniciativa y la accion de



los Poderes de Provincia, aumentando ó disminuyendo los subsidios, de que tendrán forzosamente que vivir.

Centralizar la renta, centralizar la iniciativa y la accion ¿es acaso sistema federal?

Con razon dijo, pues, el señor Mármol, que esta cuestion “es solamente el principio de un debate que
“habrá de durar muchos años en la República, toman-
“do cada dia mayores proporciones y mayor empeño..
“entre la mayor centralizacion de poder en el Gobier-
“no general, y el mayor poder y derecho de los Esta-
“dos. » (1)

En esas palabras está bien espresado el carácter verdadero de la cuestion: de un lado, el espiritu unitario, que tiende á centralizar la renta, por medio de la cual se hace efectivo el poder, absorbiendo todas las formas del impuesto; y del otro, el espiritu federal, que tiende á dividir la renta como divide el poder, dando al Gobierno Nacional el impuesto bajo una forma, y reservándolo bajo otra forma para los Gobiernos provinciales.

VI

No seria dificil proseguir señalando las manifestaciones del espiritu unitario, que se esfuerza por introducir una falsa jurisprudencia á la sombra de la Constitucion federal, y que puede acabar por presentarnos “la cho-
“cante contradiccion de una Nacion constituida bajo el
“régimen federal, y gobernada con el régimen unitario.»

Bastan, sin embargo, los hechos apuntados, para convencer de que ese espiritu existe y puede bien propagarse.

(1) Sesion del 9 de Mayo de 1860, en la Convencion de Buenos Aires.



VII

No existe tal vez deliberadamente. Los hechos que le sirven de manifestacion, no corresponden probablemente á un plan formado de hacer que, grado por grado, degeneren las instituciones aceptadas.

Los que han combatido alguna de esas manifestaciones, han sido los autores ó los defensores de otras: y esa contradiccion seria incompatible con la existencia de un plan premeditado.

La honorabilidad de las personas las pone, por otra parte, á cubierto de la sospecha de que quieran viciar á sabiendas el espíritu de la Constitucion Nacional, “ con una jurisprudencia unitaria aplicada á una Constitucion federal. »

Pero, si es de toda justicia salvar las intenciones, no es por eso menos cierto que los hechos existen, y que, si se siguen produciendo, nos han de conducir á donde sus autores no quieren ir seguramente.

Esos hechos tienen, en mi concepto, fácil explicacion.

Proceden de una aspiracion generosa que, juzgando de las cosas en detalle, y preocupándose del mal inmediato, pero accidental y transitorio, no fija su atencion en el conjunto, ni se apercibe del mal ~~in~~ inmediato, pero seguro y permanente, que ha de sobrevenir, una vez que se vicien, al darles aplicacion, las bases fundamentales de la Constitucion Argentina.

Es unas veces el deseo “ de crear un gobierno fuerte que pueda hacer frente á todas las dificultades y remediar las necesidades que han de surgir. . . . porque un Gobierno Nacional, al que le falta un gran poder, no hará, no conseguirá absolutamente nada. » (1)

Es otras veces el propósito de evitar “ que el espíritu de partido, cuando todavia no está bastante mode-

(1) Dr. Elizalde (D. R.), sesion del 28 de Junio de 1862, en el Senado.



“ rado para confiar únicamente á la ley las reparaciones individuales ó públicas, ocurra *al estado de sitio* como á medio bastante poderoso para saciar pasiones que conviene moderar ó contener ” (1) ó el temor de que “ las limitaciones impuestas á las Provincias hagan siempre que sus esfuerzos aislados sean débiles y mezquinos, si no cuentan con el apoyo de la Nacion, que puede á veces con una palabra evitar el empleo de la fuerza y ahorrar muchas desgracias á los pueblos.” (2)

Se tiene unas veces por objeto “ colocar el derecho bajo la proteccion del alto Tribunal, que erigió la Constitucion para garantir todos los derechos y todas las libertades bien entendidas ” (3) ó dotar á la Nacion de considerables recursos, para que obtenga « medios fáciles de comunicacion, pronta y abundante inmigracion, y un vasto sistema de educacion popular para los fines de la democracia » (4).

El propósito no puede ser mas generoso, ni mas digno. Aun negando la exactitud de la doctrina á que conduce, no es posible negar la simpatia á la intencion de que procede.

VIII

Pero, por santo que el propósito sea, los medios que se emplea para darle ejecucion son, en mi opinion, desahacertados.

Los Gobiernos no necesitan de mas fuerza que la que corresponde al desempeño de la mision para que son instituidos, es decir, al mantenimiento del orden en el seno de la sociedad.

Para definir lo que es el orden, cuya conservacion debe ser la medida de la fuerza de que estén investi-

(1) Nota al Gobernador de San Juan, de 31 de Julio de 1863.

(2) Sr. Ministro del Interior, sesion del 23 de Junio de 1861, en el Senado.

(3) Dr. Irigoyen, Justicia Nacional § XI.

(4) Sr. Ministro del Interior, sesion del 23 de Mayo de 1863, en la Cámara de Diputados.



dos los Gobiernos, necesito definir primeramente lo que es la libertad, segun la entiendo.

La libertad es el derecho que tiene todo hombre, para usar de sus facultades, naturales ó adquiridas, del modo que mejor convenga al mas ámplio desenvolvimiento de su personalidad, sin otro limite que el respeto que debe al derecho idéntico que tienen los demás.

El derecho que corresponde á cada hombre, no puede dejar de corresponder tambien á los cuerpos morales que se forman por la agregacion de muchos hombres.

Los Municipios, pues, y las Provincias tienen, como los individuos, el derecho de emplear sus medios respectivos del modo que mejor convenga á su engrandecimiento, sin otra regla que su propia voluntad, y sin otro limite que el derecho idéntico de los otros Municipios y de las otras Provincias.

A fin de que ese limite no sea arbitrariamente interpretado por cada uno, de modo que perjudique á los demás, las reglas constitucionales lo definen, en cuanto á los cuerpos colectivos, señalando la esfera de accion de los Poderes y las restricciones á que deben sujetarse, y en cuanto á los particulares, delegando en los Poderes creados, la facultad de señalar la esfera en que debe ejercitarse la accion individual.

La libertad es la base primordial del sistema federativo, que deja subsistir en todas partes, en el hombre, en el Municipio y en la Provincia, la espontaneidad de la iniciativa y de la accion, en vez de crear un Poder único, encargado de tener por todos pensamiento, iniciativa y accion; y que, al dejar subsistir la espontaneidad en todas partes, la limita únicamente en cuanto es necesario para mantener la armonia del conjunto.

El órden es esa misma armonia que resulta del ejercicio de la libertad, que es el derecho de cada uno y el derecho de todos.



La fuerza de que necesita un Gobierno es, pues, sobre todas, la fuerza de la opinion; porque, si una violacion del derecho produce una perturbacion social, y esa perturbacion es tan grande que requiere, para hacer que cese, una gran coercion material, teniendo el Gobierno la fuerza de la opinion, tiene con ella toda la fuerza material de que la sociedad dispone.

La agresion que se hace al derecho de uno, es una amenaza al derecho de todos, que se encuentran, por consiguiente, interesados en contener y reprimir la agresion, para salvar con el derecho agredido su propio derecho amenazado, y que no pueden dejar de concurrir, aunque sea por egoismo, á la represion del agravio y á la reparacion del derecho.

El aparato de una gran fuerza material permanente, á mas de inclinar á los que la tienen en sus manos, á prescindir de la fuerza de la opinion, sirve eficazmente para pervertir la conciencia de los pueblos, induciéndolos á creer que la fuerza material es el elemento indispensable de la seguridad y del orden, y llevándolos por grados hasta esta consecuencia inmoral y barbarizadora—*la fuerza es el derecho*—en vez de conservar entre sus creencias, esta verdad salvadora de la moral y del progreso, de la libertad y del orden—*el derecho es la fuerza*.

IX.

Si hay peligro de que « el espíritu de partido, cuando todavia no está bastante moderado para confiar « únicamente á la ley las reparaciones individuales ó públicas, ocurra al *estado de sitio* como á medio bastante poderoso para saciar pasiones que conviene moderar « ó contener » ¿por qué ese peligro ha de existir únicamente respecto de los Poderes de Provincia, y no ha de existir tambien respecto de los Poderes Nacionales?



Los hombres, en el ejercicio del Poder Nacional ¿están, por ventura, libres de las pasiones y de los errores inherentes al hombre en todas partes, y de que no pueden librarse en el ejercicio de los Poderes provinciales? ¿Hay, acaso, algun motivo que haga razonablemente presumir, que son y serán constantemente buenos los que ejercen el Poder en la Nacion; que son y serán constantemente malos los que ejercen el Poder en las Provincias?

La lógica debe ser, por consiguiente, ó suprimir las facultades del *estado de sitio* en todas partes, porque en todas partes hay peligro de que se ejerzan mal; ó dejarlas subsistir en todas partes donde pueda ser su ejercicio necesario, y con las responsabilidades al Poder que traiga consiga el abuso.

X

La debilidad de los Gobiernos provinciales para sofocar la sedicion en sus Provincias, si no cuentan con el apoyo de la Nacion, puede ser efectiva, si se desconoce en ellos la facultad de declarar el *estado de sitio*, de citar sus propias milicias, aun *para la defensa del orden interior*, y de ejercer actos de guerra *sin la aprobacion* de la autoridad Nacional.

Pero esa debilidad no ha de existir, si reconociendo que los Gobiernos de Provincia son tan perfectos para los fines de su institucion, como lo es el mismo Gobierno Nacional para los objetos de su mandato, y dotados de medios, independientes y propios, correlativos en estension á la estension de los deberes cuyo cumplimiento les incumbe, no se les niega el ejercicio de las facultades necesarias para la conservacion de su existencia, que es uno de sus deberes, y para contener



reprimir la agresion que hacen los sediciosos al derecho de la sociedad que esos Gobiernos representan, pretendiendo imponerle un órden de cosas diferente del que la misma sociedad ha consentido.

De ese modo es que los Gobiernos locales serán, como la Constitucion quiere que sean, verdaderamente independientes en todo lo que concierne al régimen interior de sus Provincias. Asi es como la requisicion seguirá siendo lo que la Constitucion la ha hecho—un derecho establecido en favor de las Provincias, para exigir que la Nacion haga efectivo el goce y ejercicio de las instituciones que la Nacion les garantiza—en vez de ser *la obligacion moral* que se les quiere suponer, y la necesidad material que se les quiere imponer, reduciéndolas á la impotencia para defenderse á si mismas.

XI

Si solo pudiera estar seguro el derecho, estando colocado bajo la tuicion del “alto Tribunal erigido para “protejer todos los derechos y todas las libertades,” la Constitucion habria consagrado la mas completa y odiosa iniquidad, manteniendo la jurisdiccion de los Tribunales de Provincia, y la jurisdiccion administrativa de los Gobiernos Provinciales. Habria sido forzoso, para evitar la inconsecuencia y la injusticia, refundir en los Tribunales de la Nacion la jurisdiccion por entero, y dar al pais, por medio de la administracion judicial, una forma unitaria de Gobierno.

Todos los derechos son igualmente respetables, todos los derechos son igualmente dignos de proteccion; y sería monstruoso que la Constitucion, haciendo una distincion inconcebible, y casi digo, insensata, se hubiera preocupado del derecho en unos casos, y lo hubiera



descuidado en otros; lo hubiera salvado en unos, poniéndolo bajo la proteccion del mas alto Tribunal de la República, y lo hubiera comprometido en otros, dejándolo fuera del alcance de esa indispensable proteccion.

Pero, no: la Constitucion no ha caido en esa inconsecuencia, ni en esa monstruosidad. Ella ha establecido para todos los casos la proteccion del derecho. Dividiendo la soberanía en su ejercicio, ha dividido la manera de dispensar aquella proteccion, encomendándola, segun los casos y por otras razones que la de proteccion, á los Poderes Nacionales ó á los Poderes de Provincia. Pero, en todos los casos, bajo la proteccion de unos ó de otros, la Constitucion ha creido y ha querido que el derecho esté siempre protegido: en todos los casos, bajo la proteccion de unos ó de otros, la Constitucion ha colocado siempre el derecho bajo la tuicion de los Poderes constitucionales; porque tan constitucionales son los Poderes de la Provincia como los Poderes de la Nacion, tan esenciales son al sistema los unos como los otros.

Hombres son los que encarnan el poder, los que administran la justicia, en la Nacion y en las Provincias; tan susceptibles son de virtud y de maldad, de verdad y de error, en una posicion como en la otra; y tan seguro ó tan en peligro está el derecho bajo la tuicion de un Poder ó bajo la tuicion del otro.

XII

Las cuestiones de inmigracion, de viabilidad y de instruccion popular son, sin duda alguna, las mas interesantes y mas graves que toca resolver á la República Argentina, para hacer prácticas las instituciones de su ley fundamental, y para avanzar rápidamente en el camino del porvenir grandioso á que tiene derecho de aspirar.



¿ De qué modo podrá facilitarse la solucion de esas cuestiones ? ¿ haciénoas del resorte esclusivo de la autoridad nacional, como la Constitucion no las ha hecho, y como tiende á hacerlas la absorcion de la renta ? ¿ ó confiándolas á la accion concurrente, como la Constitucion las ha confiado, del Poder Nacional y de los Poderes de Provincia ?

No es posible que haya duda á ese respecto. El esfuerzo de muchos es siempre mas poderoso que el esfuerzo de uno solo. El pensamiento, la iniciativa, el esfuerzo y la accion de los Poderes Provinciales, trabajando por resolver esas cuestiones, sirviéndose los unos á los otros de estímulo y de ejemplo, ha de ser mas fecundo que el pensamiento, la iniciativa, el esfuerzo y la accion del Poder Nacional únicamente.

Si esas « son cuestiones de presupuesto, es decir, cuestiones de renta, » como las clasificaba con tanta exactitud el Sr. Ministro del Interior (1), no se absorva la renta, no se suprima, diré así, el presupuesto de las Provincias.

Puesto que la accion ha de estar en todas partes, puesto que es constitucional, y justo, y conveniente que lo esté, déjese tambien en todas partes el medio indispensable de la accion.

Proclamar el derecho, establecer el deber, señalar la conveniencia, y arrebatár en seguida los medios de hacer efectivo ese derecho, de cumplir ese deber, de satisfacer esa conveniencia, es proceder de un modo contradictorio, es impedir que se convierta en hechos lo que está escrito en las palabras de la ley, es impedir los efectos de un sistema que es bueno, al mismo tiempo que se decanta su exelencia, es hacer « una jurisprudencia unitaria, aplicada á una Constitucion federal, » y preparar « la chocante contradiccion de una « Nacion constituida bajo el régimen federal, y goberna nada con el régimen unitario. »



XIII

No es ese, en mi concepto, el buen camino. Nos es-
ponemos á que esa contradiccion, que nos dará un sis-
tema federal escrito y un sistema unitario ejecutado,
nos dé por resultado los inconvenientes de uno y otro
sistema, sin darnos las ventajas de ninguno. Nos es-
ponemos á pervertir la conciencia, á confundir las
ideas, á desprestigiar los medios honestos de gobierno,
á deprimir la fé, á entristecer la esperanza, y
¡ Dios quiera que estos hechos “ anden á mayor distan-
“ cia de sus funestas consecuencias, que la que hay de
“ la conclusion á las premisas ! ” como decia el Dr.
Velez Sarsfield, en sesion del Senado (1).

No hagamos eso. La verdad es la política mejor.
Pero no basta que la verdad se encuentre en la inten-
cion; es necesario que se encuentre tambien en los
hechos. La verdad en la intencion salvará la morali-
dad y el decoro de los hombres; pero no dejará por
eso de comprometernos á todos sériamente en una si-
tuacion que puede ser sin salida.

Mantengámonos, pues, en la verdad. No adultere-
mos con la jurisprudencia el texto de la Constitucion.
Apliquémosla segun su espíritu, y confiemos en ella.
No pretendamos colocar á los hombres y á los pueblos
á propósito de todo, bajo la tutela, muy bien intencio-
nada, yo lo creo, pero infecunda, si se hace universal,
del Gobierno Nacional. Dejemos á los hombres y á los
pueblos la libertad y la responsabilidad de su propio
destino. Hagámosles comprender que el bien y el mal
ha de salir para ellos, de su propio seno, ha de ser su
propia obra. Esa es la federacion. Esa es la demo-

(1) Sesion de 28 de Junio de 1862.



cracia. Y es el medio tambien de conseguir que sea sólido y perdurable el vínculo de union entre los Pueblos Argentinos.

La federacion supone necesariamente una parte de soberania ejercida á nombre de todos por el Poder central; y supone por consiguiente, la subsistencia de la union. No hay federacion posible sin esa condicion.

Pero, si á la *union* intenta sustituirse la *unidad*, debemos esperar que á la fuerza de absorcion responda una fuerza equivalente de resistencia, y debemos temer que la lucha de esas dos fuerzas encontradas comprometa la existencia del vínculo que se quiere fortalecer.

“Lo que hace al pueblo revolucionario, ha dicho Laboulaye, es la necesidad de poseer un derecho que se le rehusa, y nunca el ejercicio de un derecho poseído » (4).

¿Qué buscarian hoy los Pueblos Argentinos en la relajacion del vínculo nacional? ¿La facultad de gobernarse á sí mismos? Están ya en posesion de ese derecho, y no puede concebirse la aspiracion á poseer lo mismo que se posee; no puede concebirse que “el ejercicio de un derecho poseído » haga revolucionarios á los Pueblos, contra el orden de la Constitucion que les reconoce ese derecho

La absorcion de facultades en el Poder central, que fuese suprimiendo gradualmente ese derecho, que los fuese privando poco á poco de la facultad de gobernarse á sí mismos, los pondria en “la necesidad de poseer un derecho que se les rehusa, » y los obligaria á empezar una lucha, que seria tan criminal como insensata mientras se respete por todos y en favor de todos, la letra y el espíritu de la ley fundamental.

El sistema federal, por consiguiente, tal como la Constitucion lo ha consagrado, se debe conservar inma-



culado, á nombre de la libertad, á nombre del progreso, á nombre de la justicia, y á nombre de la paz interna, que se mantiene mejor por el convencimiento de los Pueblos que dotando de fuerza á los Gobiernos.

XIV.

Esta es la conclusion á que me proponia llegar, mostrando la relacion que existe entre las diversas cuestiones que he indicado y lo que forma la materia principal de este trabajo, porque todas ellas son manifestaciones de un espíritu latente, involuntario quizás, pero siempre peligroso.

Sastisfecha á ese respecto mi intencion, voy á ocuparme únicamente en adelante del punto constitucional controvertido, que da motivo á este estudio.

XV.

La primera razon dada para negar la jurisdiccion que se supone en la Corte, es que, habiendo tomado la cláusula constitucional relativa, de la Constitucion de los Estados Unidos, es lógico suponer que hemos tomado con el testo el espíritu—que, por consiguiente, nuestra jurisprudencia debe ser la jurisprudencia Norte-Americana—y que, siendo la verdadera significacion de la cláusula constitucional en los Estados-Unidos, aun antes de que la enmienda XI existiera, la negativa de la jurisdiccion—esa misma negativa es la significacion verdadera de la cláusula constitucional entre nosotros.

Los dos extremos de esa argumentacion se desconocen, y es, por consiguiente, necesario demostrarlos de manera que ninguna duda dejen.



En cuanto al primero, haciendo una investigación histórica muy llena de interés, el Dr. Irigoyen se empeña en poner de manifiesto la diversidad que existe entre el punto de partida de la federación de los Estados del Norte, y el punto de partida de la federación Argentina, para deducir por consecuencia que no puede explicarse nuestra Constitución por la jurisprudencia y los antecedentes de la Constitución del Norte.

El argumento se ha repetido ya tantas veces, en términos mas ó menos expresivos, que hay peligro de que llegue á acreditarse como verdad incontestable y absoluta, que nos induzca á prescindir del mejor comentario con que podemos ilustrar la inesperienza propia en la aplicación de nuestro régimen constitucional.

Ese argumento se ha creído tan decisivo, que hasta ha llegado á decirse «que nuestras instituciones admiten una interpretación, que tienda á hacerlas menos federales que las de la Unión Americana » (1).

Conviene, pues, analizar con esmero lo que ese argumento vale.

Yo comprendo perfectamente que no todas las cláusulas de nuestra Constitución puedan explicarse por la jurisprudencia de los Estados-Unidos, porque hay en nuestra Constitución y en la Constitución del Norte cláusulas que son diversas.

Pero, en las cláusulas que están testualmente copiadas por nosotros de aquella Constitución, lo razonable es suponer que, al copiarlas, hemos entendido darles la misma significación que en el original tenían; y el comentario del original viene á ser, en consecuencia, el mejor comentario de la copia; sobre todo cuando, al

(1) Dr. Zabaleta. Sesión del 6 de Agosto de 1862, en la Cámara de Diputados.

aceptar el testó, se ha dicho espresamente que la gran ventaja de esa aceptacion testual, era que ella nos daba al mismo tiempo que el testó de una ley, el comentario y la jurisprudencia que de esa ley se deriva.

No ha faltado quien, entre nosotros, niegue « que tan profunda diferencia exista entre la historia política de los Estados Unidos y la nuestra, » para sostener en seguida de un análisis comparativo de las dos historias, que « si nuestros antecedentes políticos se asemejan tanto á los de aquella Nacion, y si la Constitucion que se ha dado el Pueblo Argentino deliberadamente es, hasta en sus mínimos detalles, una traduccion fiel de su modelo ¿por qué se pretende desautorizar la jurisprudencia constitucional de los Estados Unidos, como regla de criterio, cuando empezamos á poner en ejercicio las instituciones que hemos tomado de ellos?..... afirmando que « no solo la razon aconseja, sino tambien la moral y la lógica imponen á los hombres de Estado, el deber de volver sus ojos á la gran República, para iluminarse con su ejemplo y disipar las dudas que los detengan en la práctica de la legislación y en la vida administrativa. » (1)

Pero, aun admitiendo que la diversidad en los puntos de partida de una y otra federacion, fuera tan sustancial, « tales consideraciones serian atendibles en un Congreso Constituyente, cuando se tratara de dar la ley fundamental que debiera imperar en la Nacion..... Pero una vez dictada la Constitucion,....no nos es permitido alterarla dictando leyes de carácter opuesto, á pretexto de que nuestros antecedentes históricos y políticos no corresponden á la indole de la Constitucion que hemos copiado de los Americanos del Norte » (2).

Estas palabras, llenas de sensatez y de verdad, quitan

(1) Dr. Rawson, sesion del 3 de Julio de 1862, en el Senado.

(2) Dr. Rawson, sesion cit.

todo su mérito al argumento que, fundándose en los diversos antecedentes históricos, se esfuerza en desautorizar la jurisprudencia de los Estados Unidos, y pretendiendo crear una jurisprudencia original para nosotros, quiere falsear con ella el espíritu de la Constitución.



XVII

Y quizás podría irse mas lejos todavía. Aceptando la diferencia sustancial en el origen histórico de las dos federaciones, me parece que podría sostenerse sin esfuerzo, que la consecuencia lógica que de ese antecedente se debe deducir, es la consecuencia diametralmente opuesta á la que comunmente se deduce.

Si los Estados Unidos, partiendo de la separacion, han acabado por establecer la union del vínculo federativo, ellos, aleccionados por los inconvenientes de la separacion, por la debilidad que provenia de la casi absoluta independendencia de los Estados, deben mirar la intimidad de la union como el ideal político á que les conviene aspirar.

Nosotros que, por el contrario, partiendo de la unidad, hemos llegado á la federacion, aleccionados por los inconvenientes de la completa unidad, debemos mirar la restriccion del Poder general y la dilatacion de los Poderes locales, como el ideal político á que nos conviene aspirar.

Alejándose de la intimidad de la union, los Estados Unidos retrocederian hácia su punto de partida, se alejarian del ideal de su política y del objeto de sus aspiraciones.

Dilatando el Poder Nacional á costa de los Poderes locales, retrocederíamos nosotros hácia el punto de partida, tendiendo á la unidad de que nos hemos separado, volveríamos á alejarnos de lo que constituye nuestro

ideal político—la emancipacion de los Poderes de cada localidad—volveríamos á alejarnos del objeto de nuestras aspiraciones.

Lejos de ser, por consiguiente, cierto que la diversidad de origen permita dar á nuestras instituciones, una interpretacion mas unitaria que á las de los Estados Unidos, me parece que podria sostenerse la proposicion contraria, como mas razonable y como mas conforme á esa misma diversidad de origen, que forma, para cada una de las dos federaciones, la ley y condicion de su existencia, á que tiene cada una de las dos que mostrarse consecuente.

No iré tan lejos, sin embargo. La interpretacion debe explicar la ley sin eludirla; y la interpretacion, si es leal entre nosotros, como debe serlo, no debe hacer mas ó menos federales, mas ó menos unitarias nuestras instituciones, que lo que la Constitucion las ha hecho. Nuestro deber y nuestra conveniencia es aceptarlas como son, y ejecutarlas con verdad: nuestro deber y nuestra conveniencia es hacer con fé y buena fé, el ensayo de « la forma representativa, republicana, federal, segun la establece la Constitucion. » (1)

XVIII

A parte de esto, cuando al copiar el testo de los Estados Unidos se ha dicho espresamente que se hacia para aprovechar de su jurisprudencia, me parece que no puede negarse que esa jurisprudencia hace autoridad en el punto, para que se ha dicho que se la queria aceptar: y el punto cuestionado es uno de esos en que la intencion ha sido manifiesta.

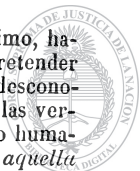
“ La Comision, dijo uno de sus miembros mas nota-



“bles en la Convencion de Buenos Aires, ha tenido
“especial empeño cuando entró en estos debates, de
“no salirse de los términos literales, en cuanto era
“posible, de la Constitucion de los Estados Unidos: no
“porque sea mas ó menos aplicable á nosotros, sino
“porque nos vamos á encontrar con una jurisprudencia
“que á nadie le será permitido decir, yo opino así.
“Mientras tanto, si no salimos de la letra de la Constitu-
“cion, tenemos á donde apelar para salir de dudas (1).”

En su informe habia dicho ya la Comision, que su base de criterio, al formular las reformas, habia sido
“la ciencia y la esperiencia de la Constitucion análoga
“ó semejante, que se reconoce como mas perfecta—la
“de los Estados Unidos—por ser la mas aplicable y ha-
“ber sido la norma de la de la Confederacion: que así
“muchas veces habia debido acudir á su testo en caso
“de duda ó deficiencia, *utilizando á la vez el caudal de*
“*las leyes suplementarias que la aclaran, así como*
“*el cuerpo de doctrina que ellas forman*”
porque sin desconocer, “al adoptar esta regla de cri-
“terio, que cada pueblo tiene su modo de ser pecu-
“liar habia reconocido tambien que el lejislador
“debe propender siempre á levantar los hechos á la
“altura de la razon, poniendo á la ley de parte de esta.

“La Comision, dice en seguida el mismo informe,
“ha partido de esta base, que es lo que constituye el
“derecho general: que existia para los pueblos libres,
“un evangelio político, una moral política, principios
“fijos que tenian el carácter de dogmas, los cuales, si
“bien pueden modificarse en su aplicacion, no es posi-
“ble alterar en su esencia Que siendo hasta el
“presente, el gobierno democrático de los E. U., el úl-
“timo resultado de la lógica humana, porque su Cons-
“titucion es la única que ha sido hecha por el pueblo
“y para el pueblo, sin tener en vista ningun interés



“bastardo, sin pactar con ningun hecho ilegítimo, ha-
“bria tanta presuncion como ignorancia en pretender
“innovar en materia de derecho constitucional, descono-
“ciendo las lecciones dadas por la esperiencia, las ver-
“dades aceptadas por la conciencia del género huma-
“no. Y por último, que por lo menos, *en aquella*
“*parte del derecho general que se halla fuera de cues-*
“*tion, y en la que se refiere á las originales combina-*
“*ciones del derecho federal moderno, no teniamos*
“titulo para enmendar ó mutilar las leyes de la Nacion
“que ha fundado y consolidado prácticamente las ins-
“tituciones federativas, apoyándose en esos mismos
“principios, invocando nosotros el especioso pretesto
“de la originalidad ó de las especialidades nacionales,
“*porque la verdad es una, y sus aplicaciones solo*
“*tienen autoridad cuando cuentan con la sancion del*
“*éxito.* (1) ”

XIX

En cuanto al segundo extremo de la argumentacion cuya exactitud se desconoce, séame permitido para demostrarlo, recordar hechos y antecedentes que he tenido ocasion de mencionar antes de ahora.

Cuando la Constitucion se discutia en los E. U., el General Hamilton, respondiendo á las objeciones que se hacia contra la organizacion del Poder Judicial, decia en el Federalista “Es inherente á la naturaleza de la soberania que no pueda ser demandada por un individuo, sin su consentimiento *no hay razon ni sombra de razon* para pretender que los Gobiernos de Estado hayan de perder, por la adopcion de este plan, el privilegio de pagar sus propias deudas, por los medios, caminos y recursos que pudieran arbitrar

(1) Diario de Sesiones de la Convencion pag. 97.



“ libres de toda coaccion que no sea la fuerza moral que
“ fluye de las obligaciones contraidas y de la buena
“ fé. Los contratos entre una Nacion ó un Estado con
“ individuos, son solamente obligatorios en la concien-
“ cia del Soberano y no traen aparejada fuerza com-
“ pulsiva. Ellos no confieren un derecho de accion
“ independiente de la voluntad soberana. ¿ A qué pro-
“ pósito se autorizarian pleitos contra los Estados por
“ deudas ó créditos reconocidos por ellos ? ¿ Cómo se
“ les podria obligar á su pago y satisfaccion ? Es eviden-
“ te que no podria hacerse sin declarar y pagar la guerra
“ contra el Estado contratante; é investir á la Suprema
“ Corte, por una mera implicancia y aniquilando el de-
“ recho preexistente de los Gobiernos de Estado, de
“ un poder que envolveria semejantes consecuencias,
“ *seria á la vez forzado é injustificable.* (1) ”

Desde el primer momento, la cláusula constitucional fué, pues, como se vé, esplicada de modo que niega la atribuida jurisdiccion de la Corte. Y para dar toda su importancia á esas palabras, conviene que no se olvide que es Hamilton su autor, el mas ardiente y mas hábil defensor de los poderes de la Union, á que deseaba dar la mayor consistencia y energia.

Mr. George Masson, analizando en la Convencion de Virginia, las facultades conferidas al Poder Judicial de la Union, decia respecto de la que dá lugar á este debate, lo siguiente:

“ No puedo convenir en la propiedad de la atribu-
“ cion que confiere á la Corte la decision de los pleitos
“ entre un Estado y los ciudadanos de otro Estado

“ ¿ Cómo obrará su jurisdiccion en este caso ? Rue-
“ go á los señores de la Convencion, que se fijen por
“ un momento en las condiciones de la poblacion de
“ nuestras fronteras del Oeste. Los reclamamos respecto
“ de aquellas tierras, cualquiera cuenta liquidada con-



“ tra el Estado, ó cualquier otro reclamo será juzgado
 “ por la Corte federal. ¿ No es esto desairoso y humi-
 “ llante ? ¿ El Estado será arrastrado á la barra de la
 “ justicia como un individuo delincuente ? ¿ La sober-
 “ ranía del Estado será emplazada á manera de un cul-
 “ pable ó de un reo comun ? ¿ Sufrirán los Estados
 “ esta indigna mortificacion ? Juzgo que *este odioso po-*
 “ *der* es perfectamente innecesario. Pero sigamos
 “ un poco mas en la materia. ¿ Qué se ha de hacer cuan-
 “ do se obtenga una sentencia contra un Estado ? ¿ Lan-
 “ zará la Corte contra él un mandato de ejecucion ?
 “ Seria ridiculo decir que la Corte puede mandar poner
 “ en la cárcel el cuerpo del Estado. ¿ Y cómo se ejecu-
 “ tará la sentencia ? *Un poder que no puede hacerse*
 “ *efectivo, no se debe conceder*

“ La mayor parte de las atribuciones ó facultades, con
 “ que se ha investido al Poder Judicial federal, son in-
 “ necesarias, son peligrosas, y tienden á menoscabar y
 “ destruir el Poder Judicial de los Estados, y por el
 “ mismo principio, el Poder Legislativo y el Gobierno
 “ de los Estados. (1) ”

Respondiendo á esas y otras observaciones, Mr. Ma-
 disson decia en la misma Convencion: “ La jurisdiccion
 “ para las controversias entre un Estado y ciudadanos
 “ de otro Estado, ha sido objetada con insistencia, y
 “ quizás sin razon. No está en el poder de los indivi-
 “ duos citar ó emplazar á un Estado ante una Corte de
 “ Justicia. *El único efecto que puede producir este*
 “ *inciso, es que si un Estado necesita entablar una de-*
 “ *manda contra un ciudadano de otro Estado, debe ha-*
 “ *cerlo ante la Corte federal* Este es un caso
 “ que acontecerá raras veces, y si se hallase impro-
 “ pio por la esperiencia, se podrá alterar. Pero, asi
 “ entendido, puede dar buenos resultados. (2) ”

(1) Deb. of the Conv. of Virginia, Ses. 18 June 1788.

(2) Session 20 June



Y Mr. Marshall agregaba en seguida: “ Respecto de
“ los pleitos entre un Estado y ciudadanos de otro Es-
“ tado, se ha censurado la jurisdiccion atribuida á la
“ Corte con una vehemencia inusitada. Espero que
“ ninguno de los señores de la Convencion pensará que
“ un Estado pueda ser llamado á la barra de una Corte
“ federal, por la demanda de un particular No
“ es racional suponer que el Poder soberano de un Es-
“ tado sea arrastrado ante una Corte de Justicia. *El in-
“ tento es habilitar á los Estados para perseguir deu-
“ das ú otros reclamos contra individuos residentes en
“ otros Estados, ó contra individuos de otros Estados.*
“ Yo sostengo que esta inteligencia está garantida por las
“ palabras de la Constitucion Yo veo una gran
“ dificultad en hacer demandable á un Estado; lo que
“ no obsta á que él pueda ser parte demandante.
“ Si un individuo tiene un reclamo contra un Estado
“ particular ¿ se puede presumir que no obtendrá la
“ debida satisfaccion, elevando á la Legislatura del mis-
“ mo Estado su solicitud y justificativos ? Pero ¿ cómo
“ podria un Estado perseguir sus reclamos contra un
“ ciudadano de otro Estado, sin el establecimiento de
“ los Tribunales federales ? (1) »

XX

Con estas esplicaciones la Constitucion se aceptó, en la inteligencia de que la cláusula en cuestion se referia únicamente á las causas promovidas *por un Estado*, y no á las causas promovidas *contra un Estado*.

Poco despues de puesta en ejercicio, un particular demandó al Estado de Georgia ante la Corte.

El Estado declinó de jurisdiccion, ordenando á su Abogado que no alegase en la materia principal del pleito.

1) Session 20 June.



La Corte no hizo lugar á la declinatoria, declarando la mayoría de sus miembros, que la cláusula comprendía las demandas promovidas *por un Estado* y las de demandas promovidas *contra un Estado*.

“ Cuando estas seguridades de los mas acreditados amigos de las nuevas instituciones, ha dicho Mr. Campbell, (1) se vieron contradichas por la admision de pleitos en esta Corte contra varios de los Estados, por individuos demandantes, poco tiempo despues de aceptada la Constitucion, surgió y se hizo sentir una grande indignacion. Esta indignacion no fué ocasionada, como se ha pretendido, por el temor de las consecuencias que pudieran resultar entre los Estados, como deudores; sino por el hecho de que veian en la admision y ejercicio de una jurisdiccion negada y desautorizada por la letra y el espiritu de la Constitucion, la violacion mas repugnante de los derechos de soberania. La historia no puede aceptar otro motivo. »

Para ponerle término, poniendo á la causa que la producía pronto y eficaz remedio, Mr. Strong, Senador por Massachussets, propuso la enmienda 11.ª de la Constitucion, que fué admitida por *veintitres* votos contra dos en el Senado y por *ochenta y uno* contra *nuere* en la Cámara de Diputados, y asentida por las Legislaturas de los Estados, ratificándola el de Georgia como *un artículo explicatorio*.

“ Asi la suprema constitucional jurisdiccion de los Estados Unidos, ha dicho Mr. Campbell en el pleito citado, la concurrente accion del Congreso y de las Lejislaturas de los Estados, espresando un consentimiento casi unánime, *corrigió* la opinion de la Suprema Corte, hizo sobreseer su juicio final en esos casos, é impidió que se promoviesen en adelante, *declarando que la Constitucion no debia entenderse que los habia permitido.*”

(1). *Florida versus Georgia*, en 1851.



Quedó así restablecido el significado verdadero de la Constitución, mal entendido por la Suprema Corte de Justicia, que había dado á esa cláusula una inteligencia diversa de la que le habían atribuido Hamilton, Madison y Marshall, que era la que sirvió de base para la aceptación; una inteligencia diversa de la que le daban los veintitres Senadores y ochenta y un Diputados que aprobaron la enmienda, y de la que le daban las Legislaturas de los Estados que la ratificaron—es decir—otra inteligencia que la que tenía el concenso general.

XXI.

« La resolución, se dice sin embargo, de la Corte, « que es á lo que propiamente puede llamarse Jurisprudencia, dirimió la cuestión por la afirmativa. Ella « estableció en el caso de Chisholm (Georgia) que el « Poder Judicial bajo la Constitución se aplicaba igualmente á causas (*suits*) promovidas *por y contra* un « Estado »

« De este modo, se agrega, el antecedente histórico « de los Estados Unidos no es favorable á los que combaten la jurisdicción de la Corte. » (1)

Y sosteniendo que lo que se ha llamado enmienda XI á la Constitución de los Estados Unidos, es realmente una enmienda y no una esplicación del texto constitucional, como lo espresó el Estado de Georgia, se dice que “no puede llamarse interpretación, una declaratoria “ introducida, sancionada, espresamente con el objeto “ de modificar, de destruir, la interpretación de la Corte “ de Estados Unidos, *único poder á quien compete “ interpretar la Constitución*:—que el Congreso no “ podía hacer esa interpretación, con resultado en



“ oposicion á la Corte, porque ésta habria persistido en
“ su interpretacion legal ó constitucional, y la declara-
“ toria del cuerpo legislativo no habria entonces pro-
“ ducido el resultado que se buscaba:—que la palabra
“ *entiéndase*, fué adoptada para cortar nuevas compli-
“ caciones, para dejar incluidas en la enmienda todas
“ las causas pendientes, y á fin de que no surgiera la
“ nueva cuestion de si la enmienda recientemente san-
“ cionada, regía los casos ya pendientes ó solo los futu-
“ ros:—que ese fué el objeto que tuvo el Estado de
“ Georgia, al prestar su ratificacion en los términos
“ recordados:—y que esa declaracion de un Estado
“ interesado no alcanzó á destruir el carácter reconoci-
“ do de la enmienda.» (1)

Esta série de reflexiones merece, para ser discutida con claridad, ser tratada con separacion; y es lo que voy á hacer, valiéndome en alguno de los puntos que comprende, de una autoridad que es para mi muy estimable, y que para mi distinguido contradictor no puede ser sospechosa, pues es la autoridad del mismo contradictor, que tanta erudicion y dialéctica tan firme ha mostrado en el estudio que me ocupo de impugnar.

XXII.

La Corte de los Estados Unidos, es muy cierto, dirimió por la afirmativa la cuestion, declarando en el caso de *Chisholm versus Georgia*, que su jurisdiccion comprendía las causas promovidas *por y contra* un Estado.

Pero, ni esa decision se puede llamar *Jurisprudencia*, ni hace desfavorable á los que combaten la jurisdiccion de la Corte, el antecedente histórico de los Estados Unidos.

(1) Dr. Irigoyen, Justicia Nacional párrafo VI.



La Jurisprudencia de los Tribunales es la que resulta de una *série* de decisiones conformes que, dando siempre la misma inteligencia al testo de la ley, acaba por constituir lo que se llama *interpretacion usual*.

No siendo *série* una sola decision, no puede decirse que ella baste para establecer *Jurisprudencia*, fijando con solidez la *interpretacion usual*.

Esa decision queda, por consiguiente, reducida á una *interpretacion doctrinal*, que solo vale lo que valgan los fundamentos que le sirven de motivo. Y estando demostrado que fué un error de la Corte, que dió á la cláusula constitucional una significacion diversa de la que tenia el asentimiento general, de la que le habian dado los autores mismos de la Constitucion, y de la que habia servido para determinar su aceptacion, los fundamentos del fallo, por mas hábiles que fuesen, no pudieron quitarle su verdadero carácter, ni convertir en lejitima " la admision y ejercicio de una jurisdiccion " negada y desautorizada por la letra y el espiritu de la " Constitucion. »

Esa decision fué contradictoria con las seguridades dadas por « los mas acreditados amigos de las nuevas « instituciones, » y la indignacion que despertó « no fué « ocasionada como se ha pretendido, por el temor de « las consecuencias que pudieran resultar contra los « Estados, como deudores, sino porque veian en ella la « violacion mas repugnante de los derechos de soberania. »

No es posible, sin abusar del lenguaje, llamar jurisprudencia á eso; y el antecedente histórico de los E. U. que queda con valor entonces, es la explicacion que de la cláusula constitucional hicieron « los mas acreditados amigos de las nuevas instituciones »—es decir—el antecedente favorable á los que combaten la jurisdiccion de la Corte.



XXIII

« La Corte, ha dicho el Dr. Irigoyen con mucha exactitud, juzga cada caso, como se ha establecido; no hace leyes ni decisiones generales obligatorias
« la Corte juzga cada caso segun las circunstancias que lo acompañan ó que lo caracterizan, sin hacer decisiones generales que encadenen su juicio y tengan fuerza de leyes. (1) »

Me felicito de encontrar esta doctrina establecida con una precision que me habria sido difícil alcanzar, y que no podria exeder en ningun caso.

Esa doctrina es aplicable á la Corte de los E. U., lo mismo que á la nuestra. En los Estados Unidos lo mismo que entre nosotros, los Tribunales resuelven casos solamente, sin hacer decisiones, ni reglas generales, que rijan las opiniones de un modo irrevocable. Allí, como entre nosotros, no hay principio que diga *res judicata veritas est*. El principio es únicamente *res judicata pro veritate habetur*.

Una cuestion de derecho, decidida una vez, puede discutirse cien y mil veces mas en nuevos casos que se presenten, y el Tribunal corregir en esos nuevos casos su propia jurisprudencia anterior.

La decision pronunciada en el caso de Chisholm contra Georgia, que solo podia producir efecto legal en ese caso, no excluye la posibilidad de que la Corte volviera atrás de su error; y existiendo esa posibilidad, ni fija jurisprudencia, ni atenúa el valor incontestable de los antecedentes históricos, que dan á la cláusula constitucional una significacion opuesta á la que le dió la Corte.

(1) Justicia Nacional párrafo III.



XXIV

Para convencerse de que lo que se llama enmienda XI á la Constitución de los E. U., no es verdadera enmienda, sino esplicacion del testo constitucional, basta fijar un poco la atencion en los términos en que se encuentra redactada.

“ No se entenderá, dice, que el Poder Judicial de los E. U. pueda estenderse hasta las causas sobre puntos de derecho y de equidad, que hayan sido iniciadas ó continuadas contra uno de los Estados Unidos por ciudadanos de otro Estado ó por ciudadanos ó súbditos de una potencia extranjera. »

Esas palabras equivalen rigurosamente á estas otras: “ Se declara que el Poder Judicial de los E. U. no puede estenderse hasta las causas sobre puntos de derecho y de equidad, que hayan sido iniciadas ó continuadas contra uno de los Estados Unidos por ciudadanos de otro Estado ó por ciudadanos ó súbditos de una potencia extranjera. »

Y esta, como se vé, no es la forma en que se dicta un nuevo precepto legal, sino la forma en que se explica un precepto legal existente, sobre el que se suscita ó puede suscitarse dudas.

XXV

Una enmienda, que habria sido una ley *ex post facto*, habria tenido que ser forzosamente una ley para el futuro, que habria impedido entablar nuevas demandas contra uno de los Estados por ciudadanos de otro, pero que habria dejado subsistentes las demandas ya entabladas.

Una esplicacion podia y debia comprender, sin viola-



cion de los principios generadores del derecho, las demandas pendientes; porque la ley interpretativa retrotrae sus efectos á la época de la ley interpretada, y es aplicable á los negocios pendientes, aunque se hayan iniciado antes de que la interpretacion se diera.

De modo que los efectos atribuidos á la enmienda, haciéndola comprender los negocios iniciados y pendientes, vienen á confirmar el carácter que le dá su redaccion—el carácter de una interpretacion, y no el de verdadera enmienda.

No siendo interpretacion, esa “declaratoria introducida, sancionada, espresamente con el objeto de modificar, de destruir, la interpretacion de la Corte, » no habria alcanzado su objeto—no porque la Corte sea el “único poder á quien compete interpretar la Constitucion »—sino porque ella “habria persistido en su interpretacion legal ó constitucional »—aplicando la enmienda, que era una ley nueva, á los casos supervinientes, y dejando de aplicarla á los casos iniciados bajo el imperio de la ley modificada.

Por eso es precisamente que se adoptó la forma esplotiva, que se hizo una interpretacion y no una enmienda verdadera, “para cortar nuevas complicaciones, para dejar incluidas todas las causas pendientes, y á fin de que no surgiera la nueva cuestion de si ella regia los casos ya pendientes ó solo los futuros.»

Si se niega crédito á los términos en que el Estado de Georgia prestó su ratificacion, por ser interesado, no podrá, sin embargo, negarse á la declaracion hecha por la Lejislatura de Virginia, en las palabras siguientes:

“Resuelve unánimemente que un Estado no puede bajo el régimen de la Constitucion de los Estados Unidos, ser demandado en un pleito instaurado por un individuo ó individuos, y que la decision de la Suprema Corte Federal, que importa que un Estado puede ser colocado en esa situacion, es incompatible con la so-



“beranía é independencia de los Estados individuales,
“tanto como peligrosa, por que tiende á una consolida-
“cion general de estas Repúblicas confederadas »

El Estado de Virginia entendió, pues, lo mismo que el de Georgia, lo que se llama enmienda XI—como una interpretacion—porque él habia ya declarado que tenia por incompatible con el régimen de la Constitucion de los Estados Unidos, la decision de la Corte.

XXVI.

Ni la Corte es, como se dice, el *único poder á quien compete interpretar la Constitucion.*

“Corresponde al Congreso como Poder Legislativo,
“al Ejecutivo y al Poder Judicial, á cada uno en su
“caso y en el ejercicio de sus funciones, la interpreta-
“cion de la Constitucion. El Congreso dicta leyes, y al
“sancionarlas interpreta la ley fundamental como la
“entiende; lo mismo sucede con los decretos y todos
“los actos del Poder Ejecutivo, y con los que son pro-
“pios del Poder Judicial, con la sola particularidad en
“nuestro sistema de que, siendo cada una de las auto-
“ridades constituidas responsable, conforme á la ley,
“por la interpretacion que hubiere dado, solo el
“Poder Judicial da la interpretacion definitiva en los
“casos que se someten á su fallo, declarando la consti-
“tucionalidad ó inconstitucionalidad de las leyes y aun
“de los actos administrativos.» (1)

Esa interpretacion definitiva de la Corte no suprime, sin embargo, la que los otros poderes han hecho en el ejercicio de sus funciones, no la revoca de un modo teórico y general: “su fuerza moral se disminuye,
“pero su efecto material no se suspende. Poco á poco,

(1) Sr. Ministro del Interior, sesion del 23 de Junio de 1861, en el Senado.



“ bajo los golpes repetidos de la jurisprudencia, es que
“ al fin se desvirtúa. » (1)

Si la interpretacion de la Corte no escluye la de los
otros Poderes, es claro que no es ella el *único poder á*
quien compete interpretar la Constitucion.

Ni podría serlo, 1.º por que esa facultad desnatura-
lizaria sus funciones, haciéndole juzgar las cuestiones
en abstracto, y 2.º por que la facultad de interpretar
la ley de un modo general, absoluto y obligatorio, solo
reside en el que tiene el poder de dictar, de modificar,
ó revocar la misma ley— y por consiguiente, la facul-
tad de interpretar la Constitucion en esa *form*^a solo
reside en el Poder Constituyente.

XXVII.

El Congreso de los Estados Unidos no podia hacer la
interpretacion que contiene la enmienda XI, “ con re-
sultado en oposicion á la Corte », por que no era Po-
der Constituyente. Por eso no fué el Congreso el que
la hizo, sino el Poder Constituyente.

Sancionada la Constitucion, la facultad de dictarla
queda reemplazada por la de reformarla ó revocarla,
porque esas facultades, análogas por su naturaleza,
residen en el mismo cuerpo y en el mismo Poder, en el
cual tambien reside la facultad de interpretarla, igual
por su naturaleza á las otras.

Pudiendo el Congreso de los Estados Unidos, con dos
tercios de votos en cada una de las Cámaras, y con la
ratificacion de las Lejislaturas de las tres cuartas partes
de los Estados de la Union, ó de Convenciones convoca-
das especialmente á este objeto, hacer enmiendas en la
Constitucion, (2) puede en la misma forma interpretar-
la, fijando su verdadero sentido, y su interpretacion

(1) Tocqueville, *Democratie en Amérique*, Chap VI.

(2) Art. V.



obliga á todos los Poderes, cualquiera que sea la que ellos hayan dado anteriormente, por que el Poder Constituyente es superior á los Poderes constituidos.

Así fué como se hizo la interpretacion contenida en la llamada enmienda XI, y por eso se hizo “ con resultado en oposicion á la Corte » que, sin revelarse contra el Poder superior Constituyente, no habria podido persistir en la interpretacion que ella habia dado, y que resultaba corregida por la interpretacion auténtica sancionada en la forma establecida por la misma Constitucion.

XXVIII

De aqui se pasa, para sostener la jurisdiccion de la Corte, á otro género de ideas, que es interesante seguir y examinar con detencion.

La facultad discutida, se dice, « no es una originalidad de la carta de Mayo, » y para comprobarlo se menciona la Constitucion de 1819 y la de 1826. (1)

La cláusula constitucional, se dice tambien, ha sido entendida por el Congreso Argentino, al sancionar la ley de 16 de Octubre de 1862, del modo que atribuye jurisdiccion á la Corte; y ha sido bien entendida porque « segun los articulos 100 y 101, corresponde á la Corte Suprema, originaria y esclusivamente, el conocimiento y decision de los asuntos en que alguna Provincia sea parte y *parte* en un proceso es el que tiene interés y lo gestiona, sea para sostener ó alcanzar el reconocimiento de un derecho, sea para eliminar una obligacion que se le imputa ó reclama y aplicando esta definicion, resalta ya cuanto violenta es la restriccion que quiere imponerse, diciendo que *parte*, en el sentido de los articulos 100

(1) Dr. Irigoyen • Justicia Nacional • párrafo VIII.



« y 101 de la Constitución Nacional, solo quiere decir
« demandante ó actor. (1) »

XXIX

Las Constituciones de 1819 y 1826 nada prueban en la cuestion actual, por dos razones que son, en mi concepto, igualmente poderosas—

1.º porque ellas pertenecen á otro sistema que el de la Constitución vigente.

2.º porque no pasaron de proyectos á que no se dió jamás ejecucion; de manera que, aunque son en realidad hechos parlamentarios, no son hechos sociales, que constituyan antecedente de la vida práctica en la República Argentina.

« Dos años despues, (1819), dice el Dr. Irigoyen, fué sancionada una Constitución, *que estuvo muy lejos de ser federal*

« La anarquía interior impidió que esa Constitución rigiera

« De acuerdo con esta resolucion, dice el mismo Señor hablando del Congreso de 1826, se sancionó *sobre la base de la unidad de régimen*, la Constitución que fué presentada á la aprobacion de los pueblos. « Todos conocemos el resultado (2) »

Los propósitos de dos Constituciones unitarias ¿pueden servir para explicar el pensamiento de una Constitución federal?

Las facultades que son compatibles con el sistema de la *unidad de régimen* ¿son siempre compatibles con el sistema de la union federativa?

La fuerza del poder, á que está todo subordinado en el sistema unitario ¿és conciliable con la independen-

(1) • Justicia Nacional • párrafo V.

(2) Dr. Irigoyen • Justicia Nacional • párrafo I.



cia de los poderes locales, que sirve de base y constituye la esencia del sistema federal ?

Estas interrogaciones solo pueden tener una respuesta negativa, y esa respuesta destruye completamente el valor de las citas que se ha hecho, de aquellas dos Constituciones en proyecto.

Los antecedentes válidos entre nosotros son, por el contrario, adversos á la pretendida jurisdiccion de la Corte.

He mencionado ya las palabras del Sr. Sarmiento en la Convencion de Buenos Aires, y las palabras del informe de la Comision que presentó las reformas. Ellas revelan de un modo indubitable, el propósito de aprovechar y de apropiarnos la jurisprudencia constitucional de los E. U., *utilizando el caudal de las leyes suplementarias que la aclaran, así como el cuerpo de doctrina que ellas forman.* Y siendo la jurisprudencia de los E. U., con la ley suplementaria que la aclara —la enmienda XI—repulsiva de la jurisdiccion de la Corte, esa jurisprudencia forma un antecedente que podemos llamar nuestro por asimilacion.

El número 8.º del Redactor contiene estas palabras que, esplicando la naturaleza y accion del Poder Judicial de la Nacion, forman otro antecedente repulsivo de la jurisdiccion de la Corte.

“La Suprema Corte de los Estados Unidos, cuya jurisdiccion se copia á la letra, es un poder que nunca obra sobre los Estados, sino meramente sobre los individuos. De otra manera los Estados particulares perderian su independencia

“El poder nacional, la Suprema Corte, no pueden sujetar á sus decisiones al Gobierno, ni á la Legislatura de los Estados particulares, ni obrar jamás sobre los Estados, ni sobre sus autoridades, sino sobre los individuos particulares. *Solo hay el caso de jurisdiccion sobre los Estados, cuando un Estado de-
manda á otro*



“ Nunca, nunca la Suprema Corte puede ser juez de los poderes públicos, ni nacionales, ni provinciales.....”

Por último, existe el hecho histórico, incontrovertible é invariable, de que jamás las Provincias han estado sometidas al juicio de Poder alguno extraño á ellas, de que siempre han estado en posesion del derecho de decidir por conducto de sus mismas autoridades, todas las causas de lo contencioso administrativo, todas sus cuestiones con individuos particulares.

XXX

El Congreso Argentino, esa es sin duda alguna la verdad, entendió, al sancionar la lèy de 16 de Octubre de 1862, la cláusula constitucional del modo que atribuye jurisdiccion á la Corte.

Pero, á pesar de los respetos que merece el Cuerpo Lejislativo de la Nacion, yo no vacilo en decir que ese hecho es un argumento muy débil en favor de la pretendida jurisdiccion.

Poco importa saber como entendió la cláusula constitucional el Congreso Argentino. Lo que importa saber es si la entendió en su verdadera acepcion. La inteligencia dada por el Congreso es un argumento de pura autoridad; y en estas materias es preciso decir—*Amicus Plato, sed magis amica veritas*—por muy grande que sea la autoridad de los hombres, la de la verdad es mayor.

Si la inteligencia dada por el Congreso no es la inteligencia verdadera, la ley no puede dar á la Corte la jurisdiccion de que por la Constitucion carece.

La jurisdiccion que pertenece al Poder Judicial de la Nacion, es una jurisdiccion escepcional, restrictiva, improrogable, que solo comprende los casos que la Constitucion le atribuye espresamente. Fuera de esos casos no es jurisdiccion, sino usurpacion de atribuciones. El



mismo Poder Legislativo no la puede estender, por que el Poder Legislativo no puede alterar la Constitucion, y la usurpacion de atribuciones, consentida y autorizada por él, no dejaria de ser usurpacion, sin embargo.

“ La Constitucion es la forma de gobierno delineada y escrita por la mano poderosa del Pueblo Argentino.

“ La Constitucion es cierta y fija: contiene la voluntad permanente del pueblo, y es la ley suprema del país. Es superior al poder del Congreso, y solo puede ser revocada ó cambiada por el poder que la hizo. “ El Congreso es la creatura de la Constitucion; debe “ su existencia á la Constitucion, y deriva todos sus poderes de la Constitucion. Todos sus actos tienen que “ ser conformes con ella, so pena de nulidad. La Constitucion es la obra ó la expresion de la voluntad del “ Pueblo mismo, en su capacidad ilimitada, originaria “ y soberana. La ley es la obra ó la expresion de la voluntad del Congreso, en su capacidad derivativa y subordinada. » (1)

XXXI

Así los defensores de la jurisdiccion de la Corte se ven forzados á sostener que el Congreso Argentino entendi6 bien, en 1862, la cláusula constitucional, y resisten definiendo las palabras, la distincion que la limita á los casos en que sean las Provincias demandantes.

Parte es, sin duda, en el juicio, tanto el demandante como el demandado. No pretendemos ni necesitamos negarlo, los que negamos la jurisdiccion de la Corte; como no negamos ni pretendemos negar que una regla de interpretacion prohíbe hacer distinciones, cuando la ley no las ha hecho.

Pero sostenemos que, en este caso, por mas amplia y absoluta que parezca la palabra de la ley, la distincion

(1) Dr. Gorostiaga, sesion del 1.º de Agosto de 1862, en la Cámara de Diputados.



está justificada, porque la distincion está en el espíritu y en los motivos de la ley, que es la primera condicion á que debe atenderse para esplicar su sentido.

La cuestion, pues, no se resuelve por el valor literal de la palabra, sino por el valor de todos los argumentos hechos en pró y en contra para demostrar su significacion verdadera y el espíritu restrictivo que ella tiene.

XXXII

“ Para dar á las Provincias, se replica, el derecho de demandar á sus deudores, no se necesitaba levantar un artículo en la Constitucion, donde solamente se consignan las prescripciones fundamentales del órden y de la libertad.

“ Las Provincias han tenido siempre, como cualquier individuo, la facultad de demandar á sus deudores y la han ejercitado sin dificultad. Los principios generales del derecho han sido suficientes para esto, sin que hayan precisado una habilitacion constitucional; y no pudo ser ese por tanto el alcance del artículo en discusion.

“ Este argumento se robustece al considerar que, si hubiera sido la tendencia del artículo 400 habilitar á las Provincias para demandar á sus deudores, no habria reservado el conocimiento de esas causas exclusivamente á la Corte Suprema. Los deudores de un Estado, de una Provincia, no invisten cualidades especiales que hagan necesaria ni sensata la creacion de un alto foro para sus asuntos. Ellos podian ser demandados ante los Juzgados de seccion de su domicilio sin inconveniente alguno, no comprendiéndose entonces la designacion de la Corte como Tribunal esclusivo.” (1)

1) Dr. Trigoeyen, «Justicia Nacional» par. II.



El argumento me parece especioso, y muy fácil de mostrarlo.

Los principios generales del derecho eran suficientes para dar á las Provincias, la facultad de demandar á sus deudores. Si. ¿Pero ante quién debia interponerse la demanda, segun esos principios generales del derecho? El actor sigue el fuero del reo. La Provincia demandante tendria que comparecer ante los Tribunales de la Provincia donde tuviese su residencia el demandado. Para hacer, pues, una escepcion á esos principios generales que se invoca, para sacar á los deudores del fuero que esos principios determinan, para someterlos á un fuero escepcional, se necesitaba una disposicion expresa ¿En dónde habia de consignarse esa disposicion? No podia ser sino en el cuerpo de la Constitucion, que es la ley destinada á delinear las facultades y la esfera de accion de los Poderes Nacionales.

Se necesita, a, pues, levantar con este objeto un articulo en la Constitucion, y ese articulo está allí en su lugar, por que la atribucion que confiere, es una de las que se ha creido necesario consignar entre las prescripciones fundamentales del órden y de la libertad.

Esas demandas pudieron someterse á la decision de los Juzgados seccionales. Sí. Pero seria algo mas que violento deducir de esa posibilidad, que la cláusula constitucional tiene la significacion que se pretende.

No es, sin embargo, sin razon que se ha establecido para ellas la jurisdiccion esclusiva de la Corte. No se ha hecho así por razon del demandado, sino por razon del demandante. Se ha creido que una Provincia era una personalidad bastante considerable en la República, para merecer que la causa en que estuviese ella interesada, fuese juzgada por un Tribunal mas altamente colocado que un simple Juez de Seccion, y ese Tribunal no podia encontrarse sino en la Suprema Corte de Justicia. Se ha querido dignificar, solemnizar el juicio, por razon del demandante.



Así se comprende perfectamente la designación de la Corte como Tribunal exclusivo, sin que pueda decirse que no hay razones especiales que hagan necesaria y sensata la creación de un alto foro para conocer de esos asuntos.

XXXIII

“ La enmienda XI, se agrega, de la Constitución Americana, no fué incluida en la Constitución Argentina. La existencia de ella y su importancia no pudieron ocultarse á los hombres que compusieron el Congreso Constituyente, cuya competencia no es posible poner en duda; y es lógico entonces deducir que, si no aceptaron esa enmienda en el texto de la Constitución, tomado en su mayor parte de la Constitución Americana, fué porque no la creyeron conveniente á los intereses de la Nación.

“ La Provincia de Buenos Aires, en 1859, . . . dejó los artículos 400 y 401, sin pretender, ni remotamente, introducir en ellos la enmienda en cuestión.

“ La Convención de Santa Fé, por su parte, dejó también intactos esos artículos

“ Si la Constitución no aceptó, pues, la enmienda; si la Convención de Santa Fé no la incluyó en sus reformas; si el Congreso legislativo ha prescindido de ella, al sancionar las leyes de la justicia federal: ¿por qué nos empeñamos en reputarla vigente?

“ Sin esa enmienda, las Provincias pueden ser demandadas

“ Para que en Norte América no lo fuesen, se hizo necesaria la enmienda, y por consiguiente, si entre nosotros ésta no ha tenido lugar, las Provincias pueden ser demandadas, como lo eran en Estados Unidos antes de sancionarse” (1).

(1) Dr. Irigoyen, «Justicia Nacional» párrafo V.



Soy prolijo tal vez con demasía, haciendo estas largas transcripciones. Pero deseo mostrar la lealtad que me anima en el debate, presentando con las palabras mismas de su autor, los argumentos que tengo necesidad de refutar.

El que precede, tiene cierta fuerza aparente, pero tiene tambien una respuesta que, creo, ha de ser satisfactoria.

Desde luego, me parece equivocado asegurar que, en los Estados Unidos, los Estados particulares podian ser demandados, antes de sancionarse la enmienda.

Así lo declaró la Corte en un caso. Pero los antecedentes que ya espuse, demuestran el error de aquella declaracion. La enmienda se hizo, no para corregir el testo constitucional, sino para esplicarlo.

Los Estados no podian ser, por consiguiente, demandados, ni antes, ni despues de la enmienda, si se daba á la Constitucion su verdadero sentido.

Establecida esa significacion por la enmienda, los Legisladores Argentinos no creyeron sin duda necesario encarnar esa enmienda en la Constitucion Nacional, por que pensaron con razon que la jurisprudencia, que habia al fin prevalecido como verdadera en los Estados Unidos, bastaba, sin necesidad de la enmienda, para fijar sin incertidumbre la significacion de las palabras copiadas por la Constitucion Argentina, de la Constitucion del Norte.

Esta esplicacion se confirma, recordando que el Redactor de la Comision dijo categóricamente: “*Solo hay el caso de jurisdiccion sobre los Estados, cuando un Estado demanda á otro*” (N. 8), y que en su informe la Comision dijo tambien que, en sus estudios, habia acudido al testo de la Constitucion Norte Americana, “*utilizando á la vez el caudal de las leyes suplementarias que la aclaran—una de las cuales es la enmienda en cuestion—y el cuerpo de doctrina que ellas forman,*” con el objeto de que nos pudiéramos “en-



“contrar con una jurisprudencia que á nadie le será permitido decir, yo opino así” y de que tuviésemos “á donde apelar para salir de dudas,” como el Señor Sarmiento lo espresó.

XXXIV.

Se señala por los defensores de la jurisdiccion, como una grave razon en favor de su doctrina, “la situacion que ha creado en los Estados Unidos la enmienda que hoy se quiere introducir en la República Argentina,” invocando la autoridad de Story, y manifestando el temor de que “esa situacion imperfecta, irregular, creada por la enmienda que aquí se quiere introducir, se produciria entre nosotros con mas fuerza de inconvenientes.»

Recordando en seguida las palabras de Lincoln, se nos pide que aprovechemos “las luces de la esperiencia que se va adquiriendo,” y se nos exhorta para que “no nos empenemos en aceptar ciegamente todas las prescripciones que rigen en la América del Norte.»

Conociendo y respetando el prudente consejo de Abraham Lincoln, “es que queremos aprovechar las luces de la esperiencia que se va adquiriendo » y hacer nuestra una doctrina, que ningun daño ha causado en los Estados Unidos, y que ha evitado tal vez muchos conflictos—porque nunca son tan claras esas luces, como “cuando cuentan con la sancion del éxito.»

Las palabras de Story que se cita, no se refieren á la facultad de juzgar á los Estados por la Corte, en demandas promovidas contra ellos. Ruego á mi ilustrado contradictor que las medite un poco, y verá como ellas se refieren á la intervencion, que juzga conveniente dar á la Justicia ordinaria en los reclamos contra el Poder; pero á la Justicia ordinaria dentro de la esfera de su



misma soberanía, á la Justicia del Estado en los reclamos contra el Estado, á la Justicia de los Estados Unidos en los reclamos contra el Gobierno de la Union.

“ Semejante procedimiento, dice, no está reconocido en ningun Estado de la Union, como materia de derecho constitucional, para dar eficacia á ningun reclamo ó deuda contra un Estado.”

En este período, Story habla del Estado particular del Estado en sí mismo, y sin considerarlo en sus relaciones con la Union.

Mas adelante dice: El Congreso, sin embargo, todavía no ha procedido en este punto como para dar reparaciones judiciales por ninguna falta de cumplimiento de contratos por el Gobierno Nacional.”

Y aqui es manifesto que habla de los Estados Unidos colectivamente tomados, y de los Poderes de la Union sin relacion con el Poder particular de cada Estado.

Por eso dice en seguida: “ No es posible dejar de participar de la opinion de un comentador ilustrado, de que á este respecto las Constituciones, tanto de la Nacion como de los Estados, necesitan una reforma . . . y que algo debe proveerse para que el derecho por reclamaciones pecuniarias contra un Estado ó contra los Estados Unidos, se establezca y declare *por sentencia judicial de alguna Corte.*”

Aqui habla copulativamente de los Estados particulares y de los Estados Unidos: pero espresando la necesidad de una reforma en las Constituciones, *tanto de la Nacion como de los Estados*, manifiesta bien claro que su idea es que cada soberanía, la soberanía de la Nacion, y la soberanía de los Estados, establezca dentro del limite de sus atribuciones respectivas, el sistema que recomienda.

De otro modo habria mencionado únicamente la necesidad de reformar la Constitucion de la Nacion, porque esa reforma, una vez hecha con las condiciones requeridas, bastaria para dar jurisdiccion á la Corte, en



los reclamos de particulares contra la Nación y contra los Estados.

Probablemente las palabras *sentencia judicial de alguna Corte* han causado en esta vez confusion, en las ideas siempre claras del C6lega cuya opinion impugno. El ha visto en esa *Corte*, la mano del Poder Nacional levantada sobre los Estados. Pero es evidente que la palabra *Corte* est1 empleada como sin6nimo de *Tribunal*. Asi quedaria el Tribunal del Estado para los negocios del Estado, el Tribunal federal para los negocios de la Union.

El sistema puede ser bueno; pero la cita de Story no favorece la opinion que quiere apoyarse en ella.

A ese sistema pertenece el ejemplo de lo que pasa en la Provincia de Buenos Aires, y que es, por lo tanto, inconducente, porque, en la Provincia de Buenos Aires, es el Tribunal de la Provincia, y no el Tribunal de la Nacion, el que conoce por apelacion de los actos de la administracion de la Provincia.

XXXV

Lejos de creer que haya ceguedad en aceptar “ todas las prescripciones que rigen en la Am6rica del Norte, ” creo que es eso lo que nos conviene y lo que debemos empe1arnos en hacer: no precisamente en los detalles, sino en las disposiciones fundamentales que marcan el car1cter y la indole de esas instituciones, maravillosamente calculadas para desenvolver y vigorizar la personalidad humana, desenvolviendo como consecuencia esa fecundidad de progreso y de energia, que presencia el mundo con asombro; que comunmente se atribuye 1 una especialidad de la raza, y que me parece mas sensato atribuir al car1cter de esas mismas instituciones.



Yo no temo que la falta de jurisdiccion de la Corte sobre los Estados, produzca entre nosotros una situacion imperfecta é irregular.

Lo que temo es el espiritu de centralizacion, el espiritu de absorcion, que, bajo el pretexto de saludable tutela, se vaya estendiendo gradualmente y acabe por impedir todo movimiento social que no haya partido del centro. Lo que yo temo, es "el espiritu de invasion que incita á los Poderes públicos á ejercer atribuciones que no les corresponden," y á que Washington, el padre de la Union, aconsejaba resistir.

Por lo mismo que la República Argentina es "un Estado naciente, despoblado, sin una civilizacion propia desarrollada" (1), es que solo puede regirse por un Gobierno federal, y que debe esforzarse en hacer suyas "las instituciones de un Pueblo, precisamente el mas libre de la tierra, el de mas rápida prosperidad, el de mas creciente poblacion" (2); porque á esas instituciones es á lo que debe aquel Pueblo, "su rápida prosperidad, su creciente poblacion y su bien asegurada libertad."

"La República Argentina, ha dicho uno de nuestros mas eminentes oradores, abraza una superficie de terreno, equivalente á doscientas mil leguas cuadradas, comprendiendo en ellas esas soledades que la geografia denomina, Patagonia, Pampa y Chaco. En ese oceano de terreno, se hallan catorce Provincias, cuyos habitantes, á manera de los náufragos de Virgilio, *rari nantes in gurgite vasto*, apenas alcanzan á componer un millon de almas. ¿Qué hombre de estado cree practicable ni posible entonces, el establecimiento de un Gobierno central y unitario, sobre tan escasas y diseminadas poblaciones" (3).

(1) Dr. Irigoyen, Justicia Nacional par. IV.

(2) Dr. Irigoyen, Justicia Nacional par. III.

(3) Dr. Gorostiaga, Sesión del 1.º de Agosto de 1962, en la Cámara de Diputados.



El error de los « unitarios del 26 » no fué la imitación, sino la irreflexion con que quisieron imitar lo que se adaptaba mal á las condiciones del pais: y el error hoy « de algunos federales » no se encuentra en los que aspiran á arraigar profundamente entre nosotros “ las instituciones del pueblo mas libre de la tierra, el “ de mas rápida prosperidad, el de mas creciente población,” sino en los que haciendo “ una jurisprudencia unitaria, aplicada á una Constitucion federal, ” acabarán por ofrecernos “ la chocante contradiccion “ de una Nacion constituida bajo el régimen federal, y “ gobernada con el régimen unitario.”

Las cuestiones de sistema no “ se reducen á una “ variedad en las formas, á una cuestion de mas ó de “ menos, en los derechos de los dos Poderes, el Poder “ central y el Poder local ” (1). No, por cierto. Los sistemas tienen sus bases esenciales, de que no es posible separarse sin falsearlas. Existe “ para los pueblos “ libres, un evangelio político, una moral política, principios fijos que tienen el carácter de dogmas “ que no es posible alterar en su esencia ” (2).

El Poder central y el Poder local no pueden estar organizados de manera que el uno sea dependiente del otro, en ninguno de sus actos, en ninguna de sus manifestaciones, de manera que el uno sea superior al otro.

Esta es la doctrina de la ciencia política en abstracto, y la doctrina contenida en las disposiciones de la ley fundamental.

“ La autoridad delegada en la Constitucion por el “ Pueblo Argentino, ha sido confiada á dos gobiernos “ *enteramente distintos*, al Gobierno Nacional y al “ Gobierno Provincial

“ Como el Gobierno Nacional ha sido formado para

(1) Dr. Irigoyen, Justicia Nacional par. VIII.

(2) Informe de la Comision.



“ responder á grandes necesidades generales, y atender
“ á ciertos intereses comunes, sus poderes han sido de-
“ finidos y son en pequeño número. Como el Gobierno
“ Provincial por el contrario, penetra en todos los de-
“ talles de la sociedad, sus poderes son indefinidos y
“ en gran número, se estienden á todos los objetos que
“ siguen el curso ordinario de los negocios y afectan la
“ vida, la libertad y la prosperidad de los ciudadanos.

“ Así pues, nuestra Constitucion ha definido con cui-
“ dado las atribuciones del Gobierno Nacional, y des-
“ pues de enumerarlas y especificarlas, ha declarado
“ que todos los poderes no comprendidos en la defini-
“ cion, entran en las atribuciones de las Provincias.
“ ‘Las Provincias conservan todo el poder no delegado
“ por esta Constitucion al Gobierno federal,’ dice el
“ artículo 104. El Gobierno de la Provincia viene á
“ ser la regla, por tanto, y forma el derecho comun.
“ El Gobierno Nacional es la escepcion » (1).

De esta esposicion, tan clara y concisa como exacta,
se deduce que el Poder que conviene mantener ámplio,
activo, vivaz, es el Poder Provincial, y que es un error,
profundo error, restringirlo ensanchando el Poder de
escepcion, el Poder Nacional.

XXXVI

Los que negamos la jurisdiccion de la Corte, decimos
“ que ella seria depresiva de la Sobernia Provincial,
“ que es por la Constitucion, y debe ser por la natura-
“ leza del sistema, completa y absoluta en todo lo que
“ se refiera á negocios é intereses de carácter pura-
“ mente local; » que seria, por consiguiente, subver-
“ siva del sistema federal, y crearia para las Provincias
una intervencion del Poder Nacional, inconciliable con
lo dispuesto en el artículo 6.º de la Constitucion.

(1) Dr. Gorostiaga, Sesión del 1.º de Agosto de 1862, en la Cámara de DD.



A esto se nos contesta que “no hay Provincias absolutamente soberanas que nuestra organizacion política nace de la Soberanía del Pueblo Argentino: que la personalidad ó soberanía interna de las Provincias, es consecuencia de la Soberanía Nacional, que descende á las Provincias, no de una manera absoluta, sino de una manera limitada, reducida á lo necesario para la creacion de un Gobierno propio, de una buena administracion interna” (1) y se nos recuerda todas las limitaciones impuestas al poder de las Provincias, por el artículo 108 de la Constitucion.

Se agrega que “no se concibe que la demanda de un ciudadano contra una Provincia comprometa la soberanía de esta porque, en esa demanda no es parte el Estado Soberano, sino el fisco, el tesoro, una persona juridica que litiga en juicio” (2) : que la Suprema Corte no es tampoco “un Tribunal que haya constituido la Prusia ó la Dinamarca, para que se le denomine extraño: que el nombramiento de sus miembros es obra del Presidente de la República, que las Provincias han elegido, y se hace con acuerdo del Senado en que todas ellas están representadas: que así no es aventurado decir que la Corte Suprema fué creada por el Pueblo de las Provincias Argentinas y que hasta el personal es nombrado por las Provincias, representadas para ese nombramiento por el Presidente de la República y por el Senado, en cuyos bancos tienen asiento los Representantes de ellas: que todo esto constituye á la Corte en Tribunal esencialmente Nacional, esencialmente Argentino y no pueden dirigir á ella las Provincias, los argumentos que haria la Francia, para resistir la jurisdiccion de los Tribunales Ingleses ó Españoles» (3).

(1) Dr. Irigoyen, Justicia Nacional párrafo VII.

(2) Dr. Irigoyen, J. N. párrafo IX.

(3) Dr. Irigoyen, J. N. párrafo X.



“ Es menos exacto, se prosigue, que la jurisdiccion atribuida á la Corte pueda ser destructora del sistema federal . . . porque el poder central se forma de las sustracciones hechas á la soberania local, ó de la autoridad que él se ha reservado al desprender sus Provincias, segun sea el origen de la federacion, y nada se opone á que las atribuciones judiciales, en casos marcados, residan en las Provincias ó permanezcan en la Nacion: . . . que esas son concesiones espontáneas que no afectan la esencia, sino la forma ó los detalles de la federacion » (1).

Se cita en comprobacion la Constitucion de los Estados Unidos de Colombia, que señala “entre las atribuciones de la Suprema Corte federal, conocer de las controversias que se susciten sobre los contratos y convenios que *el Gobierno de la Union* celebre con los Estados ó con los particulares » (2).

Y en cuanto á la intervencion que daria á la Corte la jurisdiccion disputada, no pudiendo negarse la exactitud, se dice que “ cada Estado puede constituir sus poderes en la forma mas conveniente á sus intereses, mientras no quebrante los principios de la justicia, y cualesquiera que sean las limitaciones que imponga á una rama, y la mas ó menos amplitud que dé á las otras, esto no disminuye la suma de facultades constituyente de la soberanía, y que en resultado total reside ó se conserva en él » (3).

XXXVII.

Hay en todo esto, una confusion de ideas, que me sorprende de parte de un hombre de inteligencia tan clara.

(1) Dr. Irigoyen, J. N., párrafo XI.

(2) Dr. Irigoyen, J. N. párrafo VIII.

(3) Dr. Irigoyen, J. N. párrafo XI.



Esa confusion solo puede explicarse, reconociendo que, para defender una opinion equivocada, es preciso empezar por desconocer los principios fundamentales, que forman el carácter y la índole del sistema á que la discusion pertenece.

Es innegable que “ cada Estado puede constituir “ sus poderes en la forma que crea mas conveniente “ para sus intereses sin que esto disminuya la “ suma de facultades constituyente de su soberanía . »

Pero es igualmente innegable, que no puede aplicarse una denominacion arbitraria á la forma en que los haya constituido, y que, si se aplica, no por eso la forma se varia. sino que sigue siendo la que es por su propia naturaleza.

Llámesese federales á las instituciones de la Francia, y las instituciones de la Francia seguirán siendo eminentemente unitarias. Llámesese liberales á las instituciones del Paraguay, y las instituciones del Paraguay seguirán siendo eminentemente despóticas.

Acumúlese entre nosotros facultades al Poder Nacional, suprimiéndolas al poder de las Provincias, y nuestras instituciones se volverán unitarias, aunque las sigamos llamando federales.

No es el nombre lo que buscamos. Lo que buscamos es el sistema, para conseguir sus ventajas. El nombre sin el sistema de nada nos serviría: el nombre sin el sistema, seria una impostura que á nadie engañaría.

El Pueblo Argentino tiene el derecho de constituir sus poderes bajo la forma unitaria. ¿Quién lo niega? Pero la cuestion no es esa. No se trata del derecho, sino de la voluntad y de la conveniencia: y el Pueblo Argentino no quiere constituirlos bajo esa forma: siente que esa forma es inconveniente para él.

La cuestion es entonces si, dejándole el nombre de la forma á que aspira, hay en alguien derecho para quitarle esa forma con una falsa doctrina: si hay en alguien derecho para quitarle el derecho; porque dere-



cho del Pueblo Argentino ha sido elegir la forma federal, como pudo elegir la unitaria.

Un Estado no pierde, por la manera como organiza sus Poderes, “ la suma de facultades constituyente de su soberanía.” Esto es tambien innegable. Pero no lo es menos que, si esos Poderes son ejercidos fuera de su propio seno, ya no hay constitucion, sino abdicacion de la soberanía; porque la soberanía no se conserva, si no se conserva la facultad de gobernarse á si mismo. La abdicacion parcial es necesaria para constituir un Gobierno federal. La abdicacion absoluta haria de Estados federados, un solo Estado unitario. Existiria entonces la soberanía de todos en rigurosa unidad. Pero no existiria la soberanía de cada uno.

XXXVIII

“ Las Provincias no son absolutamente soberanas. »
¿Y yo digo acaso que lo sean? ¿Desconocemos acaso los que negamos la jurisdiccion de la Corte, las limitaciones que contiene el articulo 408 de la Constitucion? De manera alguna. Lo que decimos es “ que la Soberanía Provincial es por la Constitucion, y debe ser por la naturaleza del sistema, *completa y absoluta en todo lo que se refiera á negocios é intereses de carácter puramente local.* »

Es limitada por los objetos que comprende, y en este sentido *no es absoluta*. Pero es ilimitada dentro de esos objetos, y en este sentido es *absoluta*.

“ Las Provincias por la Constitucion de la República, deben tener una soberanía *esclusiva* en sus territorios » (4).

“ La Soberanía Provincial reside en el Estado ó Pro-

(1) Dr. Velez Sarsfield, Sesión del 19 de Junio de 1862, en el Senado.



“ vicia particular. *No hay una Soberanía superior que pueda destruirla, ni aun modificarla* » (4).

“ La Constitución está basada en la independencia indestructible del Poder Provincial, y la Soberanía del Gobierno Nacional (2).

“ Los publicistas mas notables han declarado que la autonomía de los Estados particulares era y debía ser, según la Constitución, inatacable, y que todo avance cometido contra ella era un golpe mortal al pacto de unión y á la unión misma » (3).

“ Ni la Legislatura, ni el Pueblo de Provincia alguna, puede abdicar su Soberanía, ni renunciar á su gobierno propio » (4).

Acabemos.

“ Las Provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal » (3).

Las Provincias tienen, pues, “ una Soberanía exclusiva ” — “ sin superior que pueda destruirla, ni aun modificarla ” — una “ independencia indestructible ” — una “ Soberanía que no pueden abdicar ” — “ un Poder reservado ” — y por consiguiente, una Soberanía limitada en sus objetos, pero *completa y absoluta* dentro de los límites á que la Constitución la circunscribe.

Esa Soberanía es la que nosotros defendemos, esa Soberanía que vemos comprometida por la intervención que quiere darse á la Corte, que vemos amenazada de una lenta y gradual absorción, por el Poder Nacional de que la Corte es una rama.

La soberanía que ejercen los Poderes Nacionales, es también limitada en sus objetos. ¿Se dirá que no es absoluta por eso? Habría tanto error en decirlo como lo hay en decir que no es absoluta la Soberanía Provincial.

(1) Dr. Velez Sarsfield, Sesión del 1.º de Julio de 1862, en el Senado.

(2) Dr. Rawson, Sesión del 3 de Julio de 1862, en el Senado.

(3) Dr. Rawson, Sesión de 13 de Julio de 1862.

(4) Dr. Gorostiaga, Sesión del 1.º de Agosto de 1862, en la Cámara de Diputados.

(5) Art. 104.



Una y otra son absolutas dentro de su esfera respectiva, aunque ambas son limitadas; con la diferencia, sin embargo, muy notable de que los poderes del Gobierno Nacional “han sido definidos y son en pequeño número,” mientras que los poderes de los Gobiernos Provinciales “son indefinidos y en gran número,” de manera que « el Gobierno de Provincia viene á ser la regla y forma el derecho comun: el Gobierno Nacional « es la escepcion.»

El error consiste en que se confunde « la capacidad « ilimitada, originaria y soberana,» del Pueblo, con « la « capacidad derivativa y subordinada » de los Gobiernos—la Soberanía del Pueblo Argentino con la Soberanía delegada de su Gobierno, dividida y limitada en todas sus divisiones.

XXXIX

La Corte no es un Tribunal constituido por la Prusia ó por la Dinamarca, y es, sin embargo, para las Provincias un Tribunal extraño.

La Corte es un Tribunal Argentino; pero no es un Tribunal Cordobés ó Tucumano, Entre-riano, Portenó, ó Riojano: juzgando ella de negocios internos de una Provincia, seria la Nacion, y no la Provincia misma quien juzgaria esos negocios.

El Presidente de la República es un Presidente Argentino. Si el Presidente de la República gobernase lo que pertenece al régimen interior de las Provincias ¿podria decirse que las Provincias conservaban su gobierno propio?

El Congreso es un Congreso Argentino. Si las Provincias estuviesen sometidas á la legislacion esclusiva del Congreso ¿la forma del gobierno podria llamarse federal?



No. En todos esos casos, la soberanía interna de las Provincias habria dejado de existir. El gobierno propio de las Provincias habria desaparecido. La autonomía de las Provincias se habria suprimido. El Gobierno seria siempre Argentino, pero estaria consolidado en *unidad de régimen*.

Los miembros de la Corte son nombrados por el Presidente, con acuerdo del Senado : son, por consiguiente, la hechura indirecta de las Provincias ; y “ esto constituye á la Corte en Tribunal esencialmente Nacional, esencialmente Argentino. »

¿ Y hay acaso quien lo duda ? La Corte es esencialmente Nacional : pero no es esencialmente Provincial. Su nombramiento se hace para que conozca de los negocios que son de su competencia : pero no se hace para que conozca de los negocios que corresponden al régimen interno de las Provincias.

Y dado el régimen que la Constitución ha establecido, es indiferente “ que el poder central se forme de las sustracciones hechas á la soberanía local, ó de la autoridad que él se ha reservado al desprender sus Provincias, » porque, cualquiera que sea el origen de la federación, el sistema tiene sus principios fijos, sus condiciones esenciales, de que no se puede salir sin alterarlo.

Y tan esencial es al sistema que la Corte no tenga la jurisdicción que se le quiere dar, que no se la dá ni la misma Constitución de los E. U. de Colombia, que se cita como ejemplo,

Esa Constitución dá á la Corte, “ la facultad de conocer de las controversias que se susciten sobre los contratos y convenios que *el Gobierno de la Union* celebre con los Estados ó con los particulares : » sobre los contratos y convenios que *el Gobierno de la Union*—nótese bien—que *el Gobierno de la Union*—no el Gobierno de los Estados particulares—celebre.

Cuando *el Gobierno de la Union* celebra un contrato



con el Gobierno de los Estados, que dá lugar á una controversia judicial, se comprende perfectamente que sea el Tribunal de la Union, quien la decida; porque entonces no se trata del interés de un Estado particular, del interés interno de un Estado, sino del interés de la Union misma,

Cuando el *Gobierno de la Union* celebra contratos con un particular, que provocan una controversia judicial, la soberanía particular de los Estados no se encuentra interesada, cualquiera que sea el Poder ó el Tribunal que la decida, y la soberanía colectiva de los E. U. no se encuentra tampoco comprometida, sometiéndose á la decision de su Corte.

La independencia respectiva de los Poderes de la Union puede resultar afectada de ese modo, dando al Judicial la facultad de revocar actos del Ejecutivo, ó de imponer y declarar al Ejecutivo obligaciones. Pero, al fin, en ese juicio, es siempre la Union la que se juzga á sí misma: es siempre la Union representada por el Poder Judicial, la que juzga á la Union en los actos ejercidos por el Poder Ejecutivo. Es la Soberanía de la Union la que juzga á la Soberanía de la Union.

Pero, otra cosa seria, si la Soberanía colectiva juzgase sobre la Soberanía particular, si la Union juzgase á los Estados.

Por eso, la Constitucion de Colombia ha dado á la Corte, la facultad de juzgar los pleitos entre *el Gobierno de la Union* y los particulares; y no le ha dado la facultad de juzgar los pleitos entre *el Gobierno de un Estado* y los particulares.

De manera que la cita hecha por el Dr. Irigoyen, es contraria á su doctrina, y favorable á la que, por mi parte, sostengo.



XL

Cuando el Gobierno de una Provincia contrata con un particular, procede indudablemente como persona jurídica, y como persona jurídica asistiría al juicio, si el juicio hubiera de tener lugar.

Pero este argumento, á que parece darse mucha importancia, no la tiene.

Esa persona jurídica es tambien soberana. Su calidad de soberana no nace de la naturaleza del acto que ejecuta, sino de su propia naturaleza. Dictando una ley, haciéndola ejecutar, pronunciando una sentencia, ó celebrando un contrato, la Provincia es en sí misma, y el Poder que la representa es por delegacion, soberana, en cuanto concierne á su regimen interno. Su soberania nace de que, en todo lo que concierne á su régimen interno, la Provincia no tiene *superior*: de que ella se legisla, se administra y se juzga á sí misma: y de cualquier naturaleza que sea el acto ejecutado, lo ejecuta en su capacidad de soberana.

La Nacion ¿ no es tambien una persona jurídica ? ¿ Y por eso deja de ser soberana ? ¿ Su soberania no resultaria modificada ó disminuida, si un Poder extraño á ella la pudiera juzgar sin su consentimiento ?

La observacion, pues, de la personalidad jurídica, es una observacion efimera.

Y no se diga que la condicion del consentimiento, que salva la soberania, está llenada, por que las Provincias han consentido en la creacion de la Suprema Corte. Han consentido ; pero han consentido, para que la Corte juzgue lo que, por el carácter de las instituciones, debia someterse á su juicio ; no para que las juzgue á ellas en los negocios de su régimen interno.

Para eso no han consentido. Las Provincias conservan todo el poder no delegado. Si la Corte pudiera



juzgar de todos los actos de los Gobiernos Provinciales, que dieran lugar á una demanda, si pudieran revocarlos ¿cuál seria el poder real que no resultaria delegado?

Todos los actos de los Poderes Provinciales pueden ser materia de una demanda. Un contrato de arrendamiento, ó de venta, la construccion de un puente, la apertura de un camino, la reparacion de un edificio, todo puede ser materia de un pleito.

La Corte vendria á ser, por consiguiente, la que gobernase, en último resorte, á las Provincias, porque seria la que juzgase, en último resorte, de todos los actos Provinciales. ¿Seria esto Gobierno federal? La intervencion constante de la Corte en los negocios internos de las Provincias—¿seria compatible con el gobierno propio, con la autonomía, con la independencia local de las Provincias?

Además de no serlo, esa intervencion seria funesta para el progreso, porque estaria á cada instante conteniendo, hasta que se decidiesen los pleitos, la accion de los Poderes Provinciales, y estorbando con frecuencia la ejecucion de obras de un interés inmediato, urgente y general.

XLI.

Al impugnar la jurisdiccion de la Corte, los que la negamos en nombre de la Constitucion y de la verdad del sistema, hemos señalado, como uno de sus inconvenientes, la dificultad que habria para ejecutar, en muchos casos, la sentencia en que la Corte condenase á una Provincia.

“ La Corte, se nos contesta, puede reclamar á este efecto el concurso del Gobierno Nacional..... la Corte es sostenida por el brazo del Poder Ejecutivo » (4).

(1) Dr. Irigoyen, Justicia Nacional, pár. III.



“ Los Gobiernos de Provincia, se agrega, no se mos-
“ trarán rebeldes á los deberes que les impone la Cons-
“ titucion que juraron: la sensatez y el patriotismo
“ harán que las resoluciones dictadas por el Tribunal
“ Supremo de la Nacion, dentro de la órbita que le tra-
“ zó la voluntad del Pueblo, sean en la República Ar-
“ gentina, escoltadas por el respeto y la obediencia de
“ los ciudadanos y de los Gobiernos.

“ Las dificultades de ejecucion, que son un argu-
“ mento liviano, no se conciben, sino mediando espi-
“ ritu de rebellion.

“ Si la Provincia carece materialmente de recursos
“ para cumplir la sentencia, habrá llegado el momento
“ de ocurrir al Gobierno Nacional, en solicitud de un
“ subsidio, que le seria acordado en conformidad con
“ el artículo 67 de la Constitucion Nacional, y sin difi-
“ cultad, puesto que era demandado para llenar un alto
“ compromiso, impuesto en nombre de la ley de la
“ Nacion.

“ La resistencia infundada no es lícito espe-
“ rarla Pero, si contra todas las esperanzas se le-
“ vantase ¿qué se hará? salvaremos con
“ firmeza la Constitucion y mantendremos en alto la
“ ley » (1).

La respuesta es clara. Voy á empeñarme en hacer
que la réplica lo sea.

XLII.

Si se reconoce que tanto puede confiarse en la “ sen-
“ satez y patriotismo de los Gobiernos de Provincia,
“ que no se mostrarán rebeldes, y dejarán que las re-
“ resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo de la
“ Nacion, sean escoltadas por el respeto y la obediencia
“ cia » —¿ por qué se desconfía tanto al mismo tiempo,

(1) Dr. Irigoyen, Justicia Nacional, pár. XII.



de esos mismos Gobiernos? ¿por qué se teme que esten siempre dispuestos á cometer iniquidades? ¿por qué se supone que la justicia y el derecho nada valen para ellos?

Me parece que tanta confianza y tanta desconfianza implican contradiccion. Si son capaces de “sensatez y patriotismo,” no pueden ser incapaces de justicia y de respeto por el derecho. A no ser que se piense—lo que no me atrevo ni á sospechar siquiera de mi ilustrado contradictor—que “la sensatez y el patriotismo” consisten en una ciega sumision á todo lo que proceda de los Poderes Nacionales, aunque esos poderes se dejen alguna vez arrebatar por “el espiritu de invasion que “incita á los Poderes públicos á ejercer atribuciones “que no les corresponden,” por ese espiritu á que Washington, el padre de la Union, aconsejaba resistir.

Si tanto se confia en la “sensatez y patriotismo” de los Gobiernos de Provincia, me parece que no son ilusiones las que nos llevan á decir que “esos Gobiernos “tienen sus responsabilidades, tienen la opinion que “los vigila y los contiene: que son ejercidos por hombres que no han podido llegar hasta esa altura, sino “por la manifestacion de cualidades que los hagan dignos, por la honorabilidad de su vida, por la estension “de sus luces, ó la importancia de sus servicios.»

Quiero, sin embargo, suponer “que no todos reunan “esas recomendaciones: que no todos sean representaciones vivas de la moral, de la ilustracion y del patriotismo.” y pienso todavia que es mejor no tener sobre ellos levantada la mano de los Poderes Nacionales.

“Dejemos, he dicho ya, perdóneseme que lo repita— “dejemos á los hombres y á los pueblos la libertad y la “responsabilidad de su propio destino. Hagámosles “comprender que el bien y el mal ha de salir para “ellos de su propio seno, ha de ser su propia obra.»

Así es como se desenvuelve el carácter, la virilidad y



la energia de los hombres y de los pueblos. El pupilaje los comprime, los enerva y los degrada, acostumbRANDOLos á no hacer nada por sí mismos, y á esperarLo todo de lo alto.

Así, dejándolos que cuiden de su propia suerte, es como educarán su espíritu los pueblos, como formarán sus costumbres, y como tendrán al fin buenos gobiernos, que sean “ representaciones vivas de la moral, de “la ilustracion y del patriotismo.»

Habria debilidad imperdonable en sacrificar esas ventajas permanentes del futuro, por el temor de los peligros ó de los inconvenientes de un dia. La vida republicana es la vida de lucha; y solo pueden aspirar á la victoria, los hombres y los Pueblos que saben luchar con fé.

“ La libertad es el pan que ganan los Pueblos con el “ sudor de su frente; » (1) pero es tambien “ la riqueza “ y la gloria de los Pueblos.» (2) Dejemos á los Pueblos que ganen su riqueza, y que merezcan su gloria.

XLIII.

Temo que se me replique que yo incurro en contradiccion tambien, si creyendo que los Gobiernos de Provincia están ejercidos por hombres honorables, temo, no obstante, que se nieguen á cumplir las obligaciones impuestas por una sentencia de la Corte, y quiero anticiparme á esa observacion, si se me hace.

La resistencia que preveo, es perfectamente compatible con la mayor honorabilidad de las personas, con el mayor respeto á la justicia, con la mas firme adhesion á las instituciones; no escluye “ la sensatez y el patrio-

(1) Lammenais, paroles d'un croyant, XXXVIII.

(2) Id., XXXIX.



tismo; » y puede no ser sino “ la resistencia al espíritu
“ de invasion que incita á los Poderes públicos á ejercer
“ atribuciones que no les corresponden. »

Esa resistencia no basta para constituirlos sediciosos
y rebeldes.

“ Son reos de rebelion los que se alzan públicamente
“ y en abierta hostilidad contra el Gobierno Nacional,
“ para cualquiera de los objetos siguientes—

“ 1.º Para destruir la Constitucion jurada por la
“ Nacion y cambiar la forma de Gobierno—

“ 2.º Para deponer al Presidente de la Nacion,
“ despojándolo de su autoridad constitucional, ó para
“ arrancarle alguna medida ó concesion, ó para impe-
“ dir la trasmision de la misma autoridad en los tér-
“ minos y formas establecidas en la misma Constitu-
“ cion—

“ 3.º Para impedir las elecciones de Diputados y
“ Senadores Nacionales, ó para estorbar las reuniones
“ legitimas del Congreso —

“ 4.º Para disolver el Congreso ó impedir las de-
“ liberaciones y funciones de los Poderes Colegislado-
“ res, ó arrancarles alguna resolucion violando el re-
“ cinto de sus sesiones. » (1)

“ Hay sedicion, cuando una Provincia se alza en armas
“ contra cualquiera otra, por cualquier causa ó motivo,
“ y la invade sin espresa autorizacion del Gobierno
“ Nacional, ó cuando permite que bandas armadas sal-
“ gan de su territorio para invadir al de otra Provincia,
“ con el objeto de hacer prevalecer los partidos en que
“ se hubieren afiliado. » (2)

“ Son además reos de sedicion los que se alzan pú-
“ blicamente—

“ 1.º Para impedir la promulgacion ó la ejecucion
“ de las leyes del Congreso, ó la libre celebracion de las

(1) Artículo 14 de la ley de 14 de Setiembre de 1853.

(2) Artículo 19, ley citada.



“elecciones populares, para los nombramientos nacionales en los comicios, ó juntas electorales que tengan lugar en alguna localidad -

“2. ° Para impedir á cualquier Autoridad Nacional el libre ejercicio de sus funciones, y la ejecucion y cumplimiento de las providencias administrativas ó judiciales en alguna Provincia.» (1)

La simple resistencia pasiva, inerte, la simple inaccion, no bastaria, pues, para convertir en rebeldes ó sediciosos á los Gobiernos de Provincia.

Y en muchos casos, los Gobiernos de Provincia pueden resistir pasivamente, dentro del limite de sus atribuciones legítimas.

Los Ejecutivos Provinciales no pueden hacer gastos para que no hayan sido autorizados por las Legislaturas respectivas.

La Corte no podria compelerlos á la violacion de esa regla, que está en la esencia del sistema politico del pais, á mas de estar escrita en todas las Constituciones de Provincia.

Condenada una Provincia á verificar un pago, el Ejecutivo no lo podria hacer sin autorizacion legislativa; y la Corte que, como los otros Poderes de la Nacion, no puede imponer reglas á las Legislaturas de Provincia, independientes en su accion, no podria arrancarle la autorizacion que es para el Ejecutivo, indispensable.

Y muchos ejemplos podrian, como este, proponerse. ¿Qué es lo que puede hacerse en esos casos?

“Salvaremos con firmeza la Constitucion, se nos responde, y mantendremos en alto la ley » En hora buena. Pero ¿qué medios ha de emplearse para eso?

“La Corte, se contesta, puede reclamar á este efecto el concurso del Gobierno Nacional la Corte es sostenida por el brazo del Poder Ejecutivo »

Perfectamente. Tras de la intervencion judicial, la

(1) Artículo 20, ley citada.



intervencion armada. Tras de la advertencia, el palo. Irá un cuerpo de ejército á imponer con su presencia y con sus armas, la ejecucion de la sentencia.

Dudo mucho que entonces estuviera la opinion, del lado de la Corte y del Ejecutivo Nacional. Dudo mucho que los grandes intereses comprometidos por el aparato y el empleo de la fuerza, no minasen el prestigio del Poder. Dudo mucho que ese aparato no exasperase las resistencias, que de inertes pasasen á ser activas.

La guerra civil podria ser, pues, la consecuencia de la facultad con que se pretende que la Corte está investida. ¿Y puede, con presencia de ese resultado posible, sostenerse que aquella facultad es conciliable con dos de los grandes objetos que la Constitucion se propone, segun lo espresa en su preámbulo “constituir la Union “Nacional y consolidar la paz interior ? ».

Por eso es que los Norte Americanos, de cuyo ejemplo no debemos separarnos, han evitado con empeño colocar al frente de la Justicia Nacional, esas grandes personalidades que se denomina Estados, dificiles de compeler.

Quiero, sin embargo, suponer, y lo supongo con firme esperanza de que así sucederá, que « la sensatez y el patriotismo » de los Gobiernos de Provincia evite llegar hasta ese extremo; que su resistencia siga siendo pasiva; que no salgan de la inaccion; y vuelvo á preguntar ¿qué es lo que puede hacerse para dar ejecucion á la sentencia ?

¿ Se depondrá á las personas que desempeñan el Gobierno en las Provincias, para reemplazarlas por personas que consientan en la ejecucion ? Tal solucion seria dificil de explicar, armonizándola con el artículo 6.º de la Constitucion. La fuerza Nacional, “ el brazo del “ Ejecutivo Nacional, » deponiendo autoridades provinciales ! Me parece que esto vale la pena de que se medite un poco.

¿ Se vá á hacer á los Gobiernos Provinciales un



juicio de responsabilidad ? La facultad de juzgar á los Gobiernos de Provincia, fué espresamente suprimida en las reformas de la Constitucion. ¿ Reos de qué delito se les iria á juzgar, por otra parte, puesto que la resistencia pasiva no bastaria para constituirlos sediciosos y rebeldes ?

XLIV

“ Habrá llegado, se dice para entonces, el momento de ocurrir al Gobierno Nacional, en solicitud de un subsidio, que seria acordado en conformidad con el artículo 67 de la Constitucion Nacional, y sin dificultad, puesto que era demandado para llenar un alto compromiso, impuesto en nombre de la ley de la Nacion.”

Un subsidio es la cadena de oro que sirve para ligar á las Provincias, y es, por lo tanto, en mi concepto, un deplorable arbitrio casi siempre, porque tiende á someter con los vínculos de la gratitud la independencia interior de las Provincias.

Pero *el subsidio*, en ese caso, no seria acordado en conformidad con el artículo 67 de la Constitucion, sino contra lo dispuesto en ese artículo, segun el cual, puede el Congreso “ acordar subsidios del tesoro nacional á las Provincias cuyas rentas no alcanzaren, segun sus presupuestos, á cubrir sus gastos ordinarios. (1) »

Y como una condenacion judicial no seria un gasto ordinario, sino esencialmente extraordinario, el subsidio no quedaria, en ese caso, comprendido en los términos de la facultad constitucional.

¿ Cúal seria, por otra parte, el resultado de acordarlo? El *subsidio* seria pagado por el tesoro nacional. El tesoro nacional se forma de la contribucion que pagan

(1) Inciso 8.°



todos los habitantes de la República. De manera que, en último resultado, todos los habitantes de la República vendrían á pagar la condenacion decretada contra una de las Provincias. La Provincia seria nominalmente condenada; pero la condenada en realidad seria la Nacion.

¿ Habria en esto justicia ? ¿ Habria posibilidad de que el tesoro nacional se hallase en situacion de soportar las repetidas condenaciones que pudiera hacerse á las Provincias ?

Véase, pues, como el arbitrio que se propone está fuera de los términos de la Constitucion : como es inaceptable : como, bajo la invocacion augusta de la justicia, se nos quiere llevar á la mas completa injusticia, y hasta á lo que es imposible.

XLV

“ Los mismos opositores, se nos arguye, reconocen la competencia, cuando la cuestion es entre dos Provincias

“ Sostienen que el artículo constitucional se refiere al caso en que la Provincia es demandante, y lo aceptan en este sentido. Pero, en tal caso, si se deduce reconvencion ó contrademanda, la Corte Suprema conocerá de ésta

“ La jurisdiccion de la Corte sobre las Provincias se reconoce en los casos que emanan de los tratados, porque, siendo estos pactos internacionales, sus efectos no pueden ser regidos por leyes locales, ni juzgados por Tribunales provinciales.

“ Acéptanla cuando se trata de negocios que afectan á los Agentes diplomáticos

“ Este reconocimiento demuestra que en la citacion de una Provincia á la Corte, no hay agravio ni su-



“presion de soberanía, ni destruccion del sistema en
“que descansa la organizacion de la República.
“Pero la jurisdiccion que se acepta y aplaude en los
“casos espresados, se combate y condena, cuando se
“interponen los derechos de un ciudadano Argentino,
“en quien se han violado las leyes tutelares de la liber-
“tad individual ó de la propiedad. Estos intereses se
“reputan mas livianos, menos dignos de consideracion,
“y esta es una flagrante contradiccion. (1) »

XLVI

Yo no sé si, entre los opositores á la jurisdiccion de la Corte, hay alguno que « acepte y aplauda » esos casos jurisdiccionales.

En cuanto á mi, yo repito las palabras del Redactor de la Comision, en la Convencion de Buenos Aires. “*So-
lo hay el caso de jurisdiccion sobre los Estados.
cuando un Estado demanda á otro*” (2): creo de verdad innegable las palabras de Hamilton, “está en la
“naturaleza de la soberanía, que no pueda ser compul-
“sada á un juicio, por un individuo ó individuos, sin
“su consentimiento: ” creo que es una banalidad la alegacion de la supuesta monstruosidad de que un Go-
bierno sea “Juez y parte” en un negocio: y que en todo caso, esa es una consecuencia inevitable de toda organizacion, cualquiera que ella sea, de las sociedades humanas.

XLVII

Quando una Provincia demanda á otra, la jurisdiccion de la Corte es necesaria, porque, siendo ambas sobe-

(1) Dr. Irigoyen, • Justicia Nacional • párrafo XI.

(2) N.º 8, C.



ranas, no tendrían, para decidir sus contiendas, otro medio que la guerra; y la guerra entre dos Provincias es la guerra civil en la Nación, que la Nación puede y debe evitar, por la solidaridad que existe entre sus miembros, y por las garantías de seguridad y de paz que les ofrece.

En la cuestión que entre dos Provincias se suscita, no se trata, además, del régimen interno de ninguna de ellas: se trata de las relaciones interprovinciales: se trata de intereses que no son de la administración interior de la Provincia, sino intereses que se ligan á la vida comunicativa y simpática de dos miembros de la Nación, solidarios en la personalidad nacional, pero distintos en su personalidad exclusiva, en su capacidad individual. Se trata, por consiguiente, de intereses que afectan de una manera directa, la consistencia de la Unión, el mantenimiento de la paz interior, y que son así intereses nacionales.

Muy natural es entonces que sea la Nación quien la juzgue por uno de sus Poderes, porque es la Nación quien tiene únicamente la facultad de juzgar los negocios de carácter nacional.

La soberanía de las Provincias contendentes, no resulta afectada, porque esa soberanía *absoluta en lo que concierne al régimen interno*, es limitada en todo lo que concierne al régimen y al interés general de la Nación. Y no perturbando la cuestión al régimen interno de ninguna de las Provincias, sino á su régimen trascendental de relación con las otras, no está ella comprendida en la soberanía reservada, sino en la soberanía delegada. De manera que la decisión, que entra en la soberanía delegada, deja intacta la soberanía reservada.



Cuando una Provincia es demandante, ella se coloca por un acto de su propia voluntad, en todas las relaciones de derecho que una demanda establece entre la persona demandante y la persona demandada. Acepta el juicio con todas sus eventualidades, con todas sus consecuencias. Y una de las eventualidades de un juicio, según los principios generales de derecho, es la facultad del demandado para reconvenir al demandante, y el compromiso virtualmente aceptado por este, de someterse, en la reconvenção, á la jurisdicción del Tribunal que debe conocer de la demanda, aun cuando ese Tribunal no fuera competente, si la causa de la reconvenção se dedujera como demanda separada.

Así se verifica que la Provincia soberana no es juzgada sino por *su consentimiento*, y que la jurisdicción de la Corte no es, en ese caso, depresiva de la soberanía, porque no es una jurisdicción ejercida á *jure proprio*, sino una jurisdicción consentida, una jurisdicción voluntaria.

XLIX

No existiendo relaciones entre las Provincias y los Agentes diplomáticos, niego ese caso de jurisdicción, no solo como constitucional, sino como posible. Y niego la jurisdicción también, ejercida directamente sobre los Poderes de Provincia, en los casos que emanan de los tratados.

Esos casos son idénticos á los casos regidos por las leyes nacionales.

Esos casos no pueden venir directamente, por razón



de su naturaleza, á la decision de la Corte. No pueden venir sino por apelacion de los Juzgados de seccion, á quienes corresponde su conocimiento, segun el párrafo 1.º Artículo 2.º de la ley de 14 de Setiembre de 1865, ó por apelacion de los Tribunales Superiores de Provincia, segun el artículo 14 de la citada ley: y no pueden venir tampoco por razon de la persona, porque una Provincia no puede ser demandada.

En los casos que emanen de los tratados, se procedería respecto de las Provincias, como en los casos regidos por la Constitucion y por las leyes nacionales.

“ La Constitucion reconoce á los Estados el poder de hacer leyes. Estas leyes pueden violar los derechos de la Union. La soberanía de ésta se encuentra entonces, necesariamente, en lucha con la soberanía del Estado que ha dictado la ley

“ La Union habria podido citar al Estado ante el Tribunal federal, que habria declarado la nulidad de la ley; esto habria sido seguir la marcha natural de las ideas. Pero, de este modo, la justicia federal se habria encontrado directamente en presencia de un Estado; lo que se queria, en tanto como fuera posible, evitar.

“ Los Americanos han pensado que era casi imposible que una ley nueva no hiriese, en su ejecucion, algun interés particular.

“ Sobre ese interés han contado los autores de la Constitucion federal, para atacar la medida legislativa agravante de la Union. Y es á él al que ofrecen apoyo.

“ Un Estado vende sus tierras á una compañía: un año despues, una ley nueva dispone en otra forma de las mismas tierras, y viola asi la parte de la Constitucion que prohíbe alterar los derechos adquiridos por un contrato. Cuando el que ha comprado en virtud de la nueva ley, se presenta á tomar posesion, el poseedor que deriva sus derechos de la antigua, lo



“ provoca ante los Tribunales de la Union, y hace de-
 “ clarar nulo su título. De este modo, en realidad, la
 “ justicia federal se encuentra frente á la soberanía del
 “ Estado ; pero no la ataca sino indirectamente y en
 “ una aplicacion de detalles. Hiere la ley en sus con-
 “ secuencias, no en su principio; no la destruye, la
 “ enerva (1). »

Asi se procederia tambien en los casos que emanen de los tratados; sin demandar á las Provincias; esperando á que un interés particular se encuentre al frente de otro interés particular, y el conflicto de esos dos intereses encontrados vaya á buscar su solucion en el recinto de los Tribunales, llevado por un individuo contra otro individuo, jamás por un individuo contra una Provincia.

“ Considerando, ha dicho la Corte Suprema de Jus-
 “ ticia, entre nosotros, que, habiéndose reservado las
 “ Provincias por el artículo 403 de la Constitucion, el
 “ derecho de darse instituciones propias para su régi-
 “ men interior, es con arreglo á ellas, y por las auto-
 “ ridades que establezcan al efecto, que deben juzgarse
 “ y castigarse sus magistrados por los abusos de auto-
 “ ridad ó delitos que cometan, perjudicando á indivi-
 “ duos ó intereses locales solamente; porque de lo con-
 “ trario los *Tribunales Nacionales intervendrian en*
 “ *el Gobierno interior de las Provincias, y sus Ma-*
 “ *gistrados no serian los agentes de un Poder inde-*
 “ *pendiente y soberano.*

“ Considerando que la jurisdiccion de los Tribunales Nacionales es, por su naturaleza, restrictiva

“ Considerando que los principios espuestos no im-
 “ portan reconocer que la Justicia Nacional sea impo-
 “ tente en algun caso, para proteger los derechos ga-
 “ rantidos por la Constitucion; *pues si las autoridades*
 “ *provinciales que los violan, no pueden ser deman-*
 “ *dadas ante los Tribunales de la Nacion, pueden ser-*



*“ lo sus agentes ó los ejecutores de los mandatos
“ inconstitucionales, y por este medio obtener los
“ agraviados la conveniente proteccion y las repara-
“ ciones que les sean debidas (1). »*

Esta es la forma en que se deberia proceder para que pudieran “ obtener los agraviados la conveniente “ proteccion y las reparaciones que les sean debidas: ” — por demanda interpuesta contra el agente ó ejecutor de una órden infractoria de la Constitucion, de un tratado, ó de una ley nacional—no por demanda interpuesta contra una Provincia, en su personalidad politica, en su capacidad independiente y soberana, ni contra sus gobiernos, representantes directos de esa personalidad, de esa soberania independiente; porque “ es uno “ de los atributos de la Soberania, reconocido univer- “ salmente, que el que la inviste, no puede ser arras- “ trado ante los Tribunales de otro fuero, sin su espre- “ so consentimiento, por particulares, á responder de “ sus actos, y ser apremiado al cumplimiento de las “ obligaciones que de ellos puedan resultarle, cuyo “ cumplimiento está sujeto á reglas especiales, y tiene “ por garantia su buena fé » (2).

Para dar consistencia á “ los rasgos generosos que “ consignó el Pueblo Argentino en su carta fundamen- “ tal de 1853 », para que esos rasgos no esten sugetos “ á los movimientos caprichosos de las Asambleas Pro- “ vinciales, en cuyo seno entran muchas veces como “ elementos primordiales, las pasiones politicas y las “ turbulencias de los partidos, » (3) no es necesario que esté la Corte investida con la facultad de juzgar á las Provincias en su capacidad soberana, ni de juzgar á las autoridades que representan esa soberania. La Corte misma es quien lo ha dicho en la resolucion que antes cité.

(1) Fallo de 30 de Mayo de 1864, Causa **XXVIII**.

(2) Fallo de la Suprema Corte, de 26 de Setiembre de 1861, Causa **XLVI**.

(3) Dr. Irigoyen, Justicia Nacional, pár. **XIII**.



L

El interés de la justicia, la seguridad del derecho, la proteccion de las garantías, hacen indispensable la jurisdiccion pretendida. Ese es el gran resumen de todos los razonamientos que hacen los sostenedores, reforzándolo con descripciones del estado moral y político de la República Argentina, que muestran mas descon-suelo que fé en sus autores.

Podria creer con razon, que he dicho ya lo bastante para demostrar la inexactitud de esa síntesis. Voy á agregar algo mas, sin embargo. No temo hacer demasiado largo este escrito. Cuando una cuestion de tanta magnitud provoca el juicio de la opinion, es conveniente, es necesario, que todo se diga en ella, para que el juicio de la opinion pueda quedar definitivamente fijado.

La misma Constitucion manifiesta de una manera espresiva, que la justicia, el derecho, las garantías, no necesitan vivir bajo la proteccion de la Corte, para vivir aseguradas contra los Gobiernos Provinciales.

Si tanto hubiera que temer de ellos, lo natural, lo lógico, lo racional, habria sido someter á la jurisdiccion de la Corte las causas entre una Provincia y sus propios vecinos; con tanta mas razon, cuanto que los vecinos de una Provincia son los que están en mas inmediato contacto con sus autoridades, y los que están, por consiguiente, mas espuestos á sufrir sus arbitrariedades y violencias.

La omision de esas causas, que eran las que debian haber llamado mas la atencion, prueba que la Constitucion no ha creido que fuese necesario garantizar á los particulares contra los exesos de los Poderes de Provincia, por la tutela de los Poderes de la Nacion.

El estado moral y político de la República Argentina



no es un estado de perfecta beatitud. Estoy muy lejos de creer que nada haya que desear á ese respecto. Pero pienso que el medio de dominar el mal, no es rendirse al desaliento, sino emprender la lucha con vigor y con fé: no es restringir con una jurisprudencia equivocada el efecto saludable de las instituciones, sino penetrarse bien de su espíritu y dejar, como ellas lo requieren, la libertad en todas partes, en el hombre, en el Municipio, en la Provincia. Esa es la condicion del progreso, y el medio de asegurarlo, porque es el medio de hacer que penetre en todas partes el sentimiento del derecho, la conciencia de la personalidad humana y la eficacia del régimen federal.

No sirven, no, á la causa del progreso, por mas santa que sea la intencion que tengan, no sirven al imperio de la Constitucion, ni al desarrollo moral y político del pais, los que, aceptando como verdad abstracta la forma de gobierno que se ha dado, retroceden, amedrentados por la dificultad de una obra que comienza, ante efimeros inconvenientes de un dia. No la sirven los que, haciendo “una jurisprudencia unitaria aplicada á una “Constitucion federal,” acabarán por darnos “la cho-
“cante contradiccion de una Nacion constituida bajo el
“régimen federal, y gobernada con el régimen uni-
“tario.» No la sirven los federales que tienen miedo del sistema.

LI

Los principios, derechos y garantías, enumeradas en la primera parte de la Constitucion, son restricciones impuestas á todos los Poderes, Nacionales y Provinciales; y están al mismo tiempo encomendadas á la custodia de los propios Poderes que limitan, á cada uno dentro de la esfera de su accion, y bajo la responsabilidad para ante el Pueblo de que emana su nombramiento, y para ante



las autoridades *homogéneas* que le sirven de contrapeso.

Los Poderes Nacionales responden de esos principios, derechos y garantías, para ante el Pueblo de la República toda; y esa responsabilidad se hace efectiva por los medios y en la forma que establece la Constitución Nacional. Los Poderes Provinciales responden para ante el Pueblo de sus Provincias respectivas; y la responsabilidad se hace efectiva por los medios y en la forma que establezca la Constitución de cada una de las Provincias. Porque, si esos principios, derechos y garantías, son ley suprema de la Nación en el orden nacional, son á su vez ley suprema de las Provincias en el orden provincial, y forman parte de su Constitución interna (1).

Si esos principios, derechos y garantías estuviesen colocados bajo la protección *exclusiva* de los Poderes Nacionales, los Poderes de Provincia no tendrían razón de subsistir, y el título 2.º de la sección 3.ª estaría completamente de más; porque no hay acto alguno en el movimiento de la vida, que no se relacione con alguno de esos principios, derechos y garantías; de manera que no habría acto alguno en el movimiento de la vida, que no cayese bajo la jurisdicción de los Poderes de la Nación, quedando los Poderes de Provincia condenados á hacer su rotación en el vacío.

Mientras tanto, el Poder de las Provincias es el poder general, y el Poder Nacional es el poder de excepción. El Poder Nacional solo tiene las facultades que le han sido delegadas; y el Poder de las Provincias tiene como facultades exclusivas, todas las que no han sido delegadas al Gobierno federal, y puede usar como de facultades concurrentes, de las mismas que han sido objeto de la delegación, siempre que—1.º su uso no esté espresamente prohibido á las Provincias—2.º, que no esté espresamente declarada *exclusiva* del Gobierno federal

(1) Artículo 5.º Constitución Nacional.



—3.º que el ejercicio de la facultad federal no sea de hecho, incompatible con el uso de la misma facultad por los Gobiernos de Provincia.

¿ Para qué tanto poder, si los Gobiernos de Provincia hubieran de ser puramente de aparato, porque todo cayese bajo la jurisdicción de los Poderes Nacionales, como caería, si fuesen ellos los protectores *exclusivos* de los principios, derechos y garantías ?

Pero, no: todo ese poder es necesario, porque los Gobiernos de Provincia son Gobiernos efectivos, y en sus territorios, son Gobiernos mas amplios que el Gobierno Nacional. Todo ese poder es necesario, porque la Constitución ha colocado los principios, derechos y garantías que enumera, bajo la protección de los Poderes que ella ha creado, y los Poderes de Provincia son creados por ella, lo mismo que los Poderes Nacionales. Unos y otros nacen de la Constitución; unos y otros son esenciales: y el único objeto con que las Constituciones erigen Poderes, invistiéndolos de facultades, es el de que sean los guardianes de los derechos que garanten. El principio de autoridad es meramente auxiliar. El único principio fundamental para las sociedades, es el principio de libertad. La autoridad no se concibe existiendo por sí y para sí: no se concibe sino para garantizar la libertad, que es el derecho—es decir—no se concibe sino como agente de la sociedad, cuya base es el derecho.

LII

La facultad de juzgar á las Provincias en demandas promovidas por individuos particulares, innecesaria para afianzar la justicia, proveer á la defensa comun, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, es peligrosa para el objeto de constituir la Union Nacional y consolidar la paz interior,



y por tanto, incompatible con los propósitos generales que la Constitución enuncia en su preámbulo. Revisando ese carácter, no puede suponerse deferida á la Suprema Corte, sin suponer que existe manifiesta contradicción entre los fines á que la Constitución aspira, y los medios empleados para conseguir esos fines.

Si las Provincias conservan todo el poder que no ha sido delegado por la Constitución al Gobierno federal, (1) es claro que su soberanía individual es el principio dominante de nuestro derecho constitucional, y que esa soberanía solo puede considerarse limitada, cuando exista una disposición inequívoca en la Constitución que la limite. Los atributos de esa soberanía son la regla general: las facultades del Gobierno federal son la excepción.

Y como la excepción no comprende sino los casos y las cosas clara y espresamente exceptuadas, toda duda respecto de atribuciones se debe resolver en favor de la soberanía provincial y en contra de las atribuciones del gobierno general.

Bastaría, por consiguiente, la duda, bastaría la ambigüedad de la frase constitucional, para que debiera negarse á la Suprema Corte la facultad de que se pretende investida, aunque no existieran todos los antecedentes y las poderosas razones indicadas, para demostrar que el espíritu de la Constitución es repulsivo de esa facultad, inconsistente con la naturaleza del sistema, innecesaria, peligrosa, y destinada á provocar resistencias y conflictos, en cambio de la ventaja hipotética de una justicia que, sin ella, puede muy bien obtenerse.

Todo concurre, pues, á negarla, mientras que ninguna razón de un orden fundamental concurre á sostenerla.

Los recuerdos, las hábitos y las preocupaciones del espíritu anterior al sistema de la Constitución fe-

(1) Artículo 104.



deral, pugnando contra el espíritu de esa Constitución, son los que inclinan á inteligencias claras y á conciencias rectas, á pretender para el Poder central atribuciones que son inconsistentes con su naturaleza y su misión. Los hábitos, las ideas y las preocupaciones del centralismo, son las que sostienen la creencia todavía de que los poderes fuertes son una necesidad en nuestro estado social, la creencia de que el Poder Nacional debe estar revestido de estensas facultades y de ámplios medios de acción, que lo habiliten para manifestarse en todas partes, para ocuparse de todo, para iniciarlo y ejecutarlo todo.

El Poder Nacional no necesita, para responder dignamente á su misión, tener mas facultades que las que la Constitución le ha dado espresamente. El Poder que necesita de estensas facultades y de ámplios medios de acción, es el Poder particular de las Provincias, porque es el Poder llamado á intervenir en “ todos los “ objetos que siguen el curso ordinario de los negocios “ y afectan la vida, la libertad y la prosperidad de los “ ciudadanos. »

En todo lo concerniente á su gobierno propio, en todo lo que interesa á su progreso interno, las Provincias no han cedido ninguno de los poderes esenciales, no se han desprendido de ninguno de los atributos que sustancialmente constituyen la soberanía particular de cada una: y uno de los mas clásicos atributos de esa soberanía, es la facultad de juzgar por las autoridades que la representan, por sus propias autoridades, las cuestiones contenciosas de su administración, las cuestiones con simples particulares.

Despojarlas de esa facultad, estendiendo por interpretación las que se supone conferidas al Poder Nacional, es usurpar lo que no está espresamente delegado. Y esa usurpación, por la razón en que se funda, debe lógicamente conducir á la supresión total de los Poderes Provinciales. Si no puede confiarse en la jus-



ticia de estos Poderes cuando se trata de administrarla á los que tienen con ellos un conflicto de interés ó de derecho, no puede confiarse tampoco en la justicia de esos mismos Poderes cuando se trata de administrarla en general, sea juzgando ó legislando; y de este modo habria que llegar, por temor de la injusticia, de la pasion y el error, hasta la destruccion completa de todos los Poderes de Provincia.

Siendo este el último resultado lógico de la atribucion disputada, ningun razonamiento es capaz de convencer de que ella se encuentre conferida en una Constitucion federal; porque ningun razonamiento es capaz de convencer de que la Constitucion contenga disposiciones contrarias al principio generador de su sistema.

Esa atribucion solo puede encontrarse compatible con la forma unitaria de gobierno, y la forma unitaria de gobierno es un anacronismo en la República Argentina.

Setiembre de 1866.

